

NOTAS Y COMENTARIOS

LA CRISIS DEL CAMPO DEL OTOÑO DE 2008*

ROY HORA**

Entre marzo y julio de 2008, un intenso conflicto entre el gobierno nacional y parte considerable de los productores agrarios del país mantuvo en vilo a la sociedad argentina. La vasta movilización ruralista forjada en esos meses culminó con la mayor derrota política experimentada por las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner desde su arribo a la presidencia en mayo de 2003. Sin embargo, la relevancia de la movilización agraria más importante de la historia nacional excede estos datos nada menores. La crisis del campo dio lugar a un intensa controversia pública –política e ideológica, pero también de política económica– que se cuenta entre las más importantes de la última década. La envergadura de esta crisis se advierte al recordar que la disputa no sólo movilizó masivamente a un sector tradicionalmente reacio a la participación en la vida política. Administraciones provinciales y autoridades municipales, fuerzas partidarias y organizaciones de la sociedad civil, así como también vastos sectores de la opinión pública, también tomaron parte en el conflicto e incidieron en su curso.

Una disputa que comprendió a tantos actores y que abarcó una geografía tan compleja suscita preguntas de índole muy variada, y puede ser interrogado desde distintas perspectivas. Este ensayo concentra su atención en unas pocas cuestiones. La primera parte del artículo describe el desarrollo del conflicto. Estudia la forma que adoptó la movilización agraria, explora de qué modo los cambios en el repertorio de la protesta social desarrollados desde la década de 1990 crearon condiciones propicias para la acción de un sector tradicionalmente marcado por grandes dificultades organizativas, y analiza la respuesta del gobierno ante el desafío ruralista. La segunda parte del trabajo se concentra en los dos aspectos no sólo más novedosos sino también más relevantes de la protesta: la capacidad de los grupos movilizados para trascender las diferencias de perspectivas e intereses que dividieron a los empresarios agrarios y a sus instituciones representativas en el pasado, y el considerable eco que el reclamo ruralista despertó más allá de sus núcleos de activistas, en particular entre la población urbana.

Ambos fenómenos suponen novedades de considerable importancia histórica. Es preciso recordar que, en el agro, la emergencia de nuevas organizaciones

* Agradezco los comentarios de Alejandro Blanco y Marcelo Leiras a una versión previa de este ensayo.

** UdeSA/UNQ/CONICET.

representativas tuvo lugar en el marco de tensiones y conflictos con las instituciones ya existentes. Así, la hostilidad hacia la más antigua de ellas, la Sociedad Rural Argentina (SRA), desde el comienzo constituyó un elemento central de la identidad de la Federación Agraria (FAA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), núcleo original de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Ello potenció las diferencias de intereses, escala y tipo de empresas que históricamente dividieron a la comunidad de productores, dando forma a un patrón de relaciones interinstitucionales marcado por la rivalidad y la sospecha mutua. En segundo lugar, vale destacar que un rasgo característico de la política argentina desde las décadas centrales del siglo XX –el momento a partir del cual la industria volcada hacia el mercado interno se convirtió en el principal motor de crecimiento económico– radica en la dificultad de los intereses rurales para construir o sumarse a alianzas capaces de comprender a actores urbanos. En este sentido, en el último medio siglo la política argentina nunca contó con voces de peso que hablaran en nombre del sector rural no sólo por la debilidad organizativa de este segmento de la producción sino también por sus dificultades para insertarse en coaliciones sociales y políticas más amplias¹.

Para explorar de qué modo y hasta qué punto se ha modificado este panorama en la actualidad, el segundo apartado del trabajo dirige su atención hacia las transformaciones económicas y sociales experimentadas por el empresario vinculado a la economía agraria de exportación en las últimas décadas. A continuación, se formulan algunas consideraciones sobre la incidencia de estos procesos en la imagen pública del sector rural y en la propia percepción que los productores agrarios tienen de sí mismos y de su relación con la sociedad y el orden político. Los aspectos analizados ofrecen una vía de entrada para entender aspectos nodales de la crisis del campo del otoño de 2008 y sugieren algunas conclusiones sobre su legado. El apartado final retoma los principales temas desarrollados a lo largo del ensayo.

I. La protesta agraria

La crisis del campo comenzó a gestarse en la noche del 11 de marzo de 2008, cuando el titular de la cartera de Economía, Martín Lousteau, anunció la creación de un nuevo régimen de retenciones (impuestos a las exportaciones), con alícuotas móviles, diseñado para incrementar la carga tributaria sobre los productos agroexportables². Esta medida, pronto conocida con el nombre de Resolución 125, afectó en primer lugar a los productores de soja, la oleaginosa que para entonces ocupaba la mitad de la superficie cultivada con granos y aportaba un porcentaje aún mayor del valor de las ventas agrícolas al exterior. Con la Resolución 125, que ataba el monto del gravamen a la evolución de los precios internacionales, el gobierno aspiraba a dirigir hacia las arcas del fisco a la parte más considerable de los ingresos extraordinarios que los agricultores estaban percibiendo como resultado del fuerte

¹ Luigi MANZETTI: "The Evolution of Agricultural Interest Groups in Argentina", *Journal of Latin American Studies*, 24:3 (1992), pp. 585-616.

² Las razones del incremento impositivo son exploradas en Osvaldo BARSKY y Mabel DÁVILA: *La rebelión del campo. Historia del conflicto agrario argentino*, Buenos Aires, Sudamericana, 2008, pp. 168-70.

incremento de las cotizaciones de los productos exportables en los meses previos. En efecto, en el verano de 2007-8, la tendencia alcista del precio de los granos, iniciada en 2003, alcanzó un ritmo febril³. En esos meses, los precios de las principales exportaciones agrícolas argentinas treparon más de un 40 %, hasta totalizar un incremento de más del 200 % en el curso de un quinquenio. Era, pues, este alza (percibida por varios actores como “vertiginosa”⁴) la que llevó al ministro Lousteau a proponer un aumento de las retenciones que, en el caso de la soja, elevaba la presión tributaria del 35 % a cerca del 45 % del valor de la producción.

Apenas la Resolución 125 tomó estado público, los principales representantes del empresariado rural –SRA, FAA, CRA y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO)– dieron voz a su malestar. “Esto va a volver a ponerse pesado, como en 2006”, auguró Mario Llambías, el presidente de CRA⁵. Reunidas en una Mesa de Enlace, estas cuatro organizaciones acordaron sumar fuerzas en una protesta común. El día 12, solicitaron la revisión de la medida, a la que calificaron de injusta y confiscatoria, e instaron a sus afiliados a suspender por 48 horas toda actividad de comercialización. El cese de actividades forma parte del tradicional arsenal de recursos con el que los productores agropecuarios manifiestan su rechazo a las iniciativas que consideran lesivas para sus intereses, y de hecho lo han empleado con suerte variable por más de tres cuartos de siglo (por primera vez, en los conflictos de 1922, cuando la SRA promovió la suspensión de las ventas de carne a las grandes empresas exportadoras)⁶. En esta ocasión, sin embargo, el paro agropecuario se acompañó de formas de protesta que, al menos para los empresarios rurales, resultaban infrecuentes. En efecto, en algunas rutas del interior del país, pequeños núcleos de militantes ruralistas formaron piquetes e interrumpieron el tránsito vehicular.

Los cortes de calles y de rutas se habían ganado un lugar visible en la segunda mitad de la década de 1990, y pronto fueron identificados como una de las novedades más relevantes del repertorio de la protesta popular en la era de las reformas de mercado⁷. Durante los agitados años de 2001/2002, los cortes de calles y rutas crecieron en intensidad. De acuerdo con un trabajo del Centro de Estudios Nueva Mayoría, los piquetes pasaron de un promedio de 240 anuales entre 1997 y 2000 a cerca de 1.400 en 2001 y 2.340 en 2002⁸. La tolerancia estatal contribuyó al auge de esta forma de protesta. En los días que precedieron a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001, los choques entre manifestantes y las

³ Entre 1990 y 2003, el precio de la soja (FOB puertos argentinos) osciló en torno a los 200/250 dólares por tonelada, con un pico de 320 dólares en 1997. Luego de un pico en el verano de 2003-2004 (320 dólares por tonelada), entre 2003 y 2006 las cotizaciones se ubicaron en torno a los 250/300 dólares. A mediados de 2007, el alza de los precios se aceleró, y en marzo de 2008 superó los 500 dólares por tonelada. Para más detalles, véase Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, SSIA.

⁴ *La Nación*, 2/2/08.

⁵ *La Nación*, 12/3/08.

⁶ Para un análisis de estos conflictos, véase Peter SMITH: *Carne y política en Argentina*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986.

⁷ Javier AUYERO: “Los cambios en el repertorio de la protesta social en la Argentina”, *Desarrollo Económico*, 42: 166 (julio-septiembre 2002), pp. 187-210; Maristella SVAMPA y Sebastián PEREYRA: *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Buenos Aires, Biblos, 2003; Gabriela DELAMATA, *Los barrios desbordados. Las organizaciones de desocupados del Gran Buenos Aires*, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2004.

⁸ El documento puede consultarse en: www.nuevamayoria.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1816&Itemid=30

fuerzas de seguridad se cobraron la vida de más de dos docenas de activistas. La conmoción pública que ello provocó, y el riesgo de que matanzas similares volvieran a producirse, hicieron que, desde entonces, las autoridades se volvieran muy permisivas hacia la protesta en la vía pública. El 26 de junio de 2002, el asesinato de dos militantes sociales a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires durante una manifestación en el municipio de Avellaneda volvió a poner sobre el tapete la violencia estatal, y reafirmó al gobierno en la decisión de no reprimir. En los años siguientes, y pese a la gradual recuperación de la economía, la pasividad de las autoridades ante el reclamo en la vía pública contribuyó a preservar la vigencia del piquete como modo de protesta, sobre todo entre actores dotados de escasos recursos alternativos para dar a conocer sus demandas⁹. Todavía en 2005, se producían unos 1.200 cortes por año, una cantidad que se ubicaba muy por encima de la registrada con anterioridad a la crisis de 2001/2. El auge de esta forma de protesta dio vida a un amplio debate, en el que algunos constitucionalistas afirmaron enfáticamente que un estado democrático debía aceptar la protesta en la vía pública por parte de grupos desfavorecidos o ignorados por el Estado, incluso si ésta afectaba otros derechos (como el derecho a transitar)¹⁰. En esos años, pues, los piquetes ganaron tanto en amplitud como en legitimidad, dando lugar a que incluso pequeños grupos de activistas afirmaran su derecho a adueñarse del espacio público. En mayo de 2006, el propio presidente Kirchner celebró la formación de un piquete promovido por ambientalistas de Gualaguaychú que, dos años más tarde, cuando estalló el conflicto del campo, todavía impedía el tránsito en un puente internacional.

El gobierno parece haber percibido a la media docena de piquetes agrarios surgidos en las jornadas del 13 y 14 de marzo de 2008 como el producto de la movilización de pequeños núcleos de activistas, a los que consideró incapaces de sostener sus reclamos en el tiempo. Por tanto, apostó a la extinción de una protesta que no sólo concebía como ilegítima sino que inicialmente no logró despertar adhesiones de peso en el propio círculo de los afectados por la Resolución 125. Es preciso recordar que el reclamo tenía por protagonista a un sector de la vida económica que desde muy temprano se había destacado por sus dificultades para dotarse de una sólida organización política o para movilizarse en la esfera pública¹¹. La pasividad política del empresariado rural se había hecho manifiesta durante el gobierno peronista de 1946-55, y volvió a quedar a la luz del día cuando el gobierno de la Revolución Libertadora creó un impuesto a las exportaciones que, para 1959, representaba un elevado porcentaje (16 %) de los ingresos del Estado central¹². En 1967, cuando el gobierno dictatorial del general Juan Carlos Onganía impuso un tributo a las exportaciones del 25 % destinado a dirigir parte del ingreso agrario hacia sectores

⁹ En 2003, se señalaba que "las autoridades suelen ser complacientes con [los cortes de ruta], por motivos políticos o sociales y, en ocasiones, para evitar males mayores". María Angélica GELLI: *Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada*, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 219.

¹⁰ Véase, por ejemplo, Roberto GARGARELLA: *El derecho a la protesta. El primer derecho*, Buenos Aires, Editorial Ad-Hoc, 2005; Hubert PARAJÓN, "¿Qué significa 'criminalización de la protesta social'?" *La Ley Actualidad*, 13/08/2009.

¹¹ Al respecto, remito a mi *Los estancieros contra el Estado. La Liga Agraria y los orígenes del ruralismo político en la Argentina*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009.

¹² Federico HERSCHL y Julio ROSSI: "Distribución de la carga tributaria en Argentina" *Desarrollo Económico* 5:17/19 (1965), p. 95.

que consideraba más dinámicos o más relevantes para promover el desarrollo económico que la producción rural (tales como infraestructura e industria), el ruralismo tampoco se movilizó. Sin embargo, no era necesario recurrir a una perspectiva histórica para corroborar esta premisa, ya que los años previos a la crisis del campo habían ofrecido abundantes pruebas de las dificultades de los empresarios agrarios para dar forma política a su malestar. Así, por ejemplo, los impuestos a las exportaciones, abolidos a comienzos de la década de 1990, resurgieron tras la crisis de 2001/2, y para comienzos de 2008 alcanzaban al 35 % del valor total del producto para la soja. En las filas ruralistas, el sostenido incremento de la presión tributaria que tuvo lugar en el quinquenio previo a la Resolución 125 generó un mal humor extendido pero resignado. Y ello no hizo más que confirmar tanto el estado de alineación de los productores agrarios respecto de la política impositiva como su incapacidad para contestarla.

En esos años, además, los representantes tradicionales del sector parecen haberse debilitado. Un informado estudio aparecido en 2006 concluía que, en las dos décadas previas, parte considerable de los productores agrarios había tomado distancia de las organizaciones que en 2008 conformaron la Mesa de Enlace, y describía a los dirigentes rurales como aquejados por un “síndrome de marginalidad”¹³. En los dos o tres años anteriores a la movilización del otoño de 2008, la política agropecuaria había sido objeto de cuestionamientos reiterados. Sin embargo, éstas críticas no se acompañaron de acciones de protesta de consideración. En 2005 y 2006, cuando el gobierno impuso restricciones cuantitativas a las exportaciones de carne y de trigo, los voceros rurales sólo atinaron a manifestar su rechazo a las medidas. Los cortes de ruta con los que la FAA amenazó en julio de 2006 y enero de 2007 no llegaron a realizarse, y los manifestantes se limitaron a suspender la comercialización de productos rurales. En dos ocasiones, en enero y noviembre de 2007, el gobierno de Néstor Kirchner elevó las retenciones a la soja, sin que ello provocase mayores reacciones entre los afectados por esta medida. En esos años, los productores tampoco respondieron las invitaciones que los instaban a promover la protesta agraria. Así, por ejemplo, durante un paro agropecuario en diciembre de 2006, una agrupación entonces opositora al gobierno nacional, denominada Pampa Sur, llamó a una “movilización masiva ... regional, provincial y, en su momento, nacional” en apoyo del campo, sin alcanzar eco alguno¹⁴.

Este escenario de pasividad rural moldeó las percepciones sobre el posible impacto de la protesta de marzo de 2008. El hecho de que el *lock out* (así lo titulaban los principales periódicos) del 13 y 14 de marzo de 2008 hubiese sido acompañado por apenas tres o cuatro cortes de rutas, que en general no se prolongaron más allá de algunas horas, parecía demostrar, de nuevo, la modestia de los recursos organizativos que el ruralismo se hallaba en condiciones de desplegar¹⁵. Cuando el día 14 el diario *Clarín* se refería a la protesta como un “paro patronal” coincidía con el gobierno en su evaluación sobre el acotado universo de actores movilizados¹⁶. Durante

¹³ Mario LATTUADA: *Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2006.

¹⁴ *La Nación*, 1/12/06.

¹⁵ *La Nación*, 15/3/08; *Clarín*, 14/3/08.

¹⁶ *Clarín*, 14/3/08.

algunos días, pues, la situación puede haberse puesto –de acuerdo con la ya citada opinión de Mario Llambías– tanto o más “pesada” que en 2006; empero, la idea de que el país se hallaba ante una “rebelión del campo” estaba fuera del horizonte del gobierno, la prensa o la propia dirigencia agraria.

Sin embargo, al cabo de un par de jornadas este panorama cambió, contribuyendo al asombro no sólo de las autoridades sino también de numerosos observadores e incluso de los propios integrantes de la Mesa de Enlace¹⁷. El 16, *Clarín* informaba sobre la existencia de “un estado de movilización de parte de los propios productores que sorprende incluso a los dirigentes del sector”¹⁸. Para entonces, y respondiendo al eco que encontraba la protesta, la Mesa de Enlace ya había decidido prolongar la duración de la medida de fuerza. La expresión más elocuente del ascenso de la protesta lo constituyeron los numerosos piquetes agrarios que comenzaron a bloquear las principales rutas de la región sojera. En los días siguientes, los medios de prensa comenzaron a registrar puntillosamente ese fenómeno novedoso, y a transmitirlo a todo el país. Desde entonces, el espectáculo ofrecido por los piquetes de tractores y máquinas agrícolas, pronto complementado por asambleas y reuniones a la vera de la ruta, no sólo sirvió para expresar el descontento que dominaba a muchos productores sino también para articularlo y potenciarlo, así como para ampliar el arco de solidaridades concitado por el reclamo agrario en los pueblos y ciudades de las provincias agrícolas.

La cobertura periodística del reclamo agrario fue amplia y en general favorable a la posición de los manifestantes¹⁹. Ya el día 19, el matutino *Página 12* resaltaba el hecho, señalando la importancia de “la exposición mediática de las movilizaciones y cortes de rutas” para crear un clima de opinión favorable a la protesta y, no menos importante, para legitimar estas iniciativas ante aquellos sectores del ruralismo hasta entonces hostiles a la acción directa²⁰. La expansión de los piquetes urbanos y suburbanos en los años inmediatamente previos a la crisis del campo, la tolerancia estatal ante esta forma de protesta, y la benevolencia con la que la prensa trató a los primeros piquetes agrarios contribuyeron decisivamente a validar y promover este curso de acción ante los ojos de los hombres de campo. Sorprendido por la masiva adhesión al corte de rutas, el día 20 el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, sostenía que “el piquete es una moda” cuya adopción, hasta muy poco antes ampliamente cuestionada en las filas ruralistas, ya nadie parecía rechazar, mientras que otro dirigente, esta vez de la FAA, señalaba que “llevo 30 años en esto y nunca había visto algo así: hasta los productores que hablaban mal de los cortes ahora están con nosotros en la ruta”²¹. Como muchos otros actores de la protesta en la vía pública de esos años, los activistas rurales concibieron al piquete como “la única forma de ser escuchados” por un Estado que, desde su punto de vista, ignoraba sus derechos y demandas²². A una semana de comenzada la medida de fuerza, los

¹⁷ *La Nación*, 20/3/08.

¹⁸ *Clarín*, 16/3/08.

¹⁹ Evidencias en este sentido pueden encontrarse en un documento de las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Véase: www.fsoc.uba.ar/archivos/institucional/medios.doc

²⁰ *Página 12*, 19/3/2008.

²¹ *Clarín*, 20/3/08; www.iprofesional.com/notas/63445-Piquete-fashion-la-SRA-dice-que-cortan-las-rutas-porque-esta-de-moda.html

²² *Clarín Rural*, 29/3/2008.

representantes agrarios y la prensa informaban que la cantidad de piquetes ya superaba los 300; de activarse simultáneamente, la protesta rural podía tornar al receso de Semana Santa que se avecinaba en un verdadero caos de tránsito²³.

Más que obra de la dirigencia sectorial (que, haya o no visto disminuida su capacidad de liderazgo en las décadas previas, carecía de los recursos organizativos necesarios para poner en marcha una protesta de esta envergadura), la expansión de los piquetes dependió de la movilización de activistas independientes pronto bautizados con el nombre de “productores autoconvocados”. Gracias a la acción del heterogéneo conjunto de manifestantes que se reconocían en este nombre, la movilización agraria desbordó el reducido universo encuadrado por la dirigencia gremial, y encontró apoyos considerables en los pueblos y ciudades de la región sojera. La difusión masiva de la telefonía inalámbrica –una novedad de la década previa–, por su parte, facilitó las tareas de organización y coordinación de estos recién llegados al mundo de la protesta, sobre todo allí donde las estructuras organizativas del ruralismo eran débiles o inexistentes (algunos relatos de tono heroico describen cómo, en pequeñas localidades de la campaña que carecían de toda experiencia gremial previa, unos pocos activistas con “apenas cuatro teléfonos celulares motorizaron una movilización nunca vista”)²⁴. La importancia de los cortes de ruta para darle una base organizativa al reclamo agrario no podría exagerarse, y no sólo porque los piquetes volvieron políticamente productivos los tiempos muertos del ciclo agrícola. El corte de ruta en la propia localidad o en sus inmediaciones permitió potenciar las energías participativas que anidaban en el seno de cada distrito, dando lugar incluso a la movilización de grupos de edad y género tradicionalmente reacios a la participación en la esfera pública, como las mujeres y los jóvenes²⁵. Y la amplia cobertura periodística permitió que la protesta, además de arraigar en el nivel local, alcanzase un alto impacto nacional.

La vitalidad de los piquetes, su autonomía respecto de la Mesa de Enlace, su insistencia en convertirse en jueces supremos del derecho a circular, la amenaza que suponían para el tránsito de hombres y mercancías y el abastecimiento regular de alimentos y, finalmente, la creciente visibilidad de este espectáculo para el público urbano (donde desde el comienzo la protesta agraria despertó simpatías), definieron un nuevo escenario para lo que había dejado de ser una medida de fuerza empresarial y se estaba convirtiendo en un “conflicto del campo” mucho más amplio. A partir de ese punto, las demandas de los activistas rurales ya no pudieron tramitarse a través de una negociación entre la dirigencia ruralista y los funcionarios responsables de la política agropecuaria. Este cambio se reflejó en el tratamiento del conflicto por parte de la prensa escrita; por ejemplo, el diario *La Nación* comenzó a cubrir la movilización agraria en su sección de economía y al cabo de unos días lo mudó a la de política. Este tránsito reflejó la creciente presión para que la cumbre del gobierno nacional –que durante más de diez días guardó un sordo silencio, revelador de su confianza inicial en el carácter efímero e intrascendente de la movilización ruralista– sentase posición sobre el mejor modo de encarar la protesta rural. El marco en el que ello se

²³ *La Nación*, 20/3/08.

²⁴ *Clarín Rural*, 29/3/2008; *Crítica*, 12/7/2008; *Página 12*, 23/3/2008.

²⁵ Descripciones como las de *La Nación*, 29/3/2008, y *Página 12*, 23/3/2008 ponen de relieve la amplia participación de la población de los distritos agrícolas en los piquetes.

produjo no contribuyó a atenuar el antagonismo. El 25 de marzo por la mañana, voceros del gobierno anunciaron que, esa misma tarde, la presidente Cristina Fernández se referiría al conflicto. A las pocas horas, los representantes de los productores se anticiparon a advertir que, cualquiera fuese el tono del mensaje de la jefa de Estado, las medidas de fuerza decretadas el 12 y confirmadas el 14 mantendrían su vigencia por tiempo indeterminado.

El desafiante pronunciamiento de los ruralistas, que guardaba sintonía con el humor de los activistas de las rutas, dejó al gobierno con escaso margen de maniobra. Y ello era doblemente problemático puesto que el gobierno de Néstor Kirchner, y en su estela el de su esposa comenzado pocos meses antes, había afirmado su autoridad sobre la base de gestos de firmeza. Por tanto, no sorprende que la desairada mandataria tomase la decisión de condenar enérgicamente una protesta que, al cabo de trece días, había alcanzado gran visibilidad pero cuya real envergadura y solidez aún constituían enigmas. En la tarde del 25, Cristina Fernández se refirió a los empresarios del campo señalando que “nadie critica que se puedan comprar 4x4 y vivan bien”, siempre y cuando su éxito se acompañase de mayor responsabilidad social y, sobre todo, del debido respeto a las decisiones de la autoridad constitucional. Estas palabras contemporizadoras fueron acompañadas por otras más duras. La presidente denunció a los “piquetes de la abundancia”, e instó a los hombres del campo a despejar las rutas, advirtiéndoles que “no me voy a someter a ninguna extorsión”.

Estos juicios, que retrataban a los activistas rurales como individuos ubicados al margen de la ley o como figuras carentes de toda responsabilidad social, ofendieron la moral de los alzados, hicieron recrudecer el reclamo en las rutas y contribuyeron, en definitiva, a reafirmar su voluntad de enfrentar al gobierno²⁶. Para ello, paradójicamente, los ruralistas contaban con la involuntaria pero decisiva contribución de las propias autoridades. La tolerancia que el Estado había mostrado ante la ocupación del espacio público en los años previos, y el temor a desatar una represión que se cobrase vidas, restringieron objetivamente el margen de maniobra del Poder Ejecutivo, que a lo largo de todo el conflicto se inclinó por reclamar, antes que por imponer, el levantamiento de los piquetes. Poco dispuesto a involucrar a fuerzas de seguridad de cuyo profesionalismo parecía dudar, el gobierno recurrió al auxilio de grupos de militantes de su confianza para colaborar en la tarea de restaurar el orden en la vía pública. Esta estrategia se reveló relativamente eficaz en la Capital Federal, donde grupos de activistas como los encabezados por Luis D'Elía y otros líderes piqueteros del conurbano impidieron que manifestantes afines al reclamo del campo se adueñaran, en las noches del 25 y el 26 de marzo, de un espacio de tanta relevancia simbólica como la Plaza de Mayo.

Se trató, sin embargo, de una victoria de alcances limitados. Amén de afectar la reputación del gobierno (acusado de tolerar, cuando no de apañar la acción de grupos violentos), la movilización de los militantes oficialistas de la periferia urbana no podía resolver todos sus problemas. Estos grupos poco podían hacer para acallar los cacerolazos y contener a los pequeños pero numerosos grupos de manifestantes que en esos días salieron a la calle en los barrios de clase media y media alta, así

²⁶ *Clarín*, 26/3/2008.

como también en los distritos céntricos de numerosas urbes grandes y medianas del interior del país (Tucumán, Santa Rosa, Córdoba, Río Cuarto, Resistencia). Más importante, los apoyos del gobierno carecían de los recursos organizativos necesarios para disputar el control de las rutas con los más de doscientos piquetes agrarios que se activaban y desactivaban cotidianamente en la región sojera. El sindicato de camioneros, sobre quien la Casa Rosada por un momento quiso hacer recaer esta difícil faena (y que, además de afinidad con las autoridades nacionales, también tenía sus propios motivos para impulsar el retorno a la normalidad en las rutas), pronto renunció a encarar una tarea que excedía sus fuerzas, sobre todo desde que los núcleos más aguerridos de la militancia rural dejaron claro que no estaban dispuestos a ceder y comenzaron a armarse. Los piquetes, pues, permanecieron.

Privado de instrumentos efectivos con los que dirimir en su favor la disputa por el dominio de las rutas con un grupo de activistas bien implantado en los distritos rurales, y más numeroso y más dispuesto a persistir en su reclamo –en parte porque contaba con respaldos tanto en el campo como en la ciudad– de lo que en su momento había imaginado, el gobierno tornó su retórica más belicosa, y comenzó a dotar al conflicto de mayor significado político. En ese punto, las autoridades nacionales se dispusieron a movilizar apoyos describiendo a los ruralistas no sólo como empresarios egoístas sino también como rivales políticos a los que resultaba imperioso no sólo vencer sino también doblegar. En ese marco, cobraron mayor relieve público antiguos argumentos que describían a los empresarios agrarios como el sector económicamente más parasitario y políticamente más reaccionario de la clase propietaria²⁷. La propia presidente contribuyó a promover estas visiones sobre el carácter primitivo y atrasado de estos capitalistas cuando, para gran irritación de los hombres de campo, en un discurso del 31 de marzo, calificó a la soja como “un yuyo que crece sin ningún tipo de cuidados especiales”. Y dos días más tarde, ante una muy nutrida concurrencia reunida en la Plaza de Mayo para condenar la protesta agraria, Cristina Fernández caracterizó a los impugnadores de la política oficial como “golpistas” que habían colaborado en el derrocamiento del gobierno justicialista de 1973-76, y a los medios de comunicación que acompañaban la movilización del campo como “generales multimediáticos”.

Estas denuncias no afectaban de igual modo a todos los protagonistas de la protesta agraria. Las acusaciones dirigidas a señalar la complicidad de la dirigencia agraria con la violación del orden constitucional apuntaban en primer lugar contra la Sociedad Rural. Amén de desprestigiar a esta institución, estos argumentos servían para presionar a la FAA, entre cuyos dirigentes no faltaban los que poseían afinidades políticas peronistas o de centro-izquierda, para que tomasen distancia del frente agrario. Esta presión se incrementó cuando, al cabo de algunos días de protesta, el bloqueo de las rutas comenzó a afectar la oferta de alimentos. La incidencia objetiva de las restricciones al tránsito de alimentos se vio agravada pues, amén de algunas declaraciones desafortunadas, la dirigencia agraria le prestó escasa atención a los problemas que el cierre de las rutas traía aparejados para los consumidores urbanos. Acusada de promover el alza de los precios y el desabastecimiento de productos básicos como la carne y los lácteos, y de ignorar su impacto sobre los más humildes,

²⁷ Sobre la construcción de esta visión remito a mi *Los terratenientes de la pampa argentina. Una historia social y política, 1860-1945*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005.

la protesta agraria se convirtió en blanco de numerosas críticas, que una y otra vez señalaron el carácter antipopular del bloque agrario. Y mientras el gobierno insistía sobre estos puntos, y amenazaba con la puesta en vigencia de una draconiana ley de abastecimiento (que preveía duras penas de prisión para los infractores), también desplegaba iniciativas contemporizadoras, dirigidas a acercar a la FAA a la posición oficial. Así, el 31 de marzo, el ministro de Economía anunció que el régimen de retenciones sería reformado de modo de beneficiar a las explotaciones más pequeñas o más alejadas de los puertos de embarque.

Todo ello pareció surtir efecto. Según distintos observadores, tras quince días de conflicto comenzaron “a aparecer las señales de desgaste”, y mermó la adhesión en los piquetes²⁸. Y a la vez que se consumía la energía de los rebeldes, y el frente agrario se agrietaba, el poder presidencial daba señales de renovada fortaleza. El 1º de abril, el gobierno nacional organizó un acto multitudinario en la Plaza de Mayo, que constituyó, según el juicio de sus propios impulsores, “la mayor demostración [pública] de fuerza del kirchnerismo en cinco años”²⁹. La movilización congregó a todos los aliados del gobierno, con la única (pero muy notoria) excepción de los dirigentes del sindicato de trabajadores rurales. Cuando la reunión finalizó, el ex presidente Kirchner estaba “exultante”, y “se palpaba satisfacción en la Casa Rosada”³⁰. En ese punto, pues, el gobierno parecía confiar en que, ya casi doblegado el desafío ruralista, el conflicto se acercaba a su finalización³¹.

Este pronóstico se reveló errado, aunque fue preciso esperar varias semanas para advertirlo. El 2 de abril, la Mesa de Enlace anunció la suspensión de las medidas de fuerza por el lapso de un mes, argumentando en favor de la normalización de la circulación de bienes y personas y la oferta de alimentos. Esta decisión surgió tras una concurrida asamblea realizada en Gualaguaychú, una localidad íntimamente identificada con la protesta, y la cuna y principal base de operaciones de su líder más aguerrido y carismático, Alfredo de Angeli. Por tanto, no puede calificarse como una victoria de sus sectores moderados. En rigor, para entonces el desánimo ante la dureza de la reacción oficial hacía mella incluso entre los militantes agrarios más belicosos. Por otra parte, desde el punto de vista de los agricultores, esta tregua era poco menos que imprescindible, pues les urgía comenzar la cosecha gruesa (soja y otros granos). Sin la reapertura de las rutas, la maquinaria agrícola, casi toda ella contratada a proveedores externos a las empresas agrarias, no podía desplazarse hasta los sembradíos donde debía comenzar su trabajo sin demora.

Mientras los hombres de campo retornaban a sus labores, comenzó una nueva ronda de conversaciones. Convencido de que la voluntad de combate de los piquetes agrarios se había extinguido, el gobierno creyó innecesario hacer concesiones. Cometió un grave error. Con el grano acumulado en silos bolsa o en camino a los puertos de embarque, y luego de unas semanas de descanso, muchos militantes agrarios encontraron la energía suficiente como para persistir en su reclamo. Sensible al belicoso humor que provenía de sus bases, la Mesa de Enlace cerró filas en torno

²⁸ *Página 12*, 2/4/2008.

²⁹ *La Nación*, 2/4/2008.

³⁰ *Página 12*, 2/4/2008.

³¹ *Crítica*, 2/04/2008; *Página 12*, 2/4/2008; *Clarín*, 2/4/2008.

al pedido de rebaja de retenciones y, tras poco más de un mes de tregua, el paro agrario se reanudó el 7 de mayo. Los piquetes volvieron a adueñarse de las rutas, aunque desde entonces los dirigentes rurales se mostraron más sensibles a la necesidad de no antagonizar a la sociedad urbana. Para contrarrestar las acusaciones que los sindicaban como promotores de desabastecimiento, desde ese momento y hasta el fin del conflicto la Mesa de Enlace se comprometió a liberar periódicamente el tráfico comercial y el tránsito de personas, acotando su interdicción al transporte de granos y hacienda. Sin embargo, los dirigentes agrarios no siempre contaron con el ascendiente suficiente como para obligar a los más duros piquetes autoconvocados a honrar estos compromisos.

En esta segunda fase de la disputa, el fantasma del desabastecimiento se atenuó. Pero las diferencias se profundizaron, y el conflicto alcanzó una nueva escala, así como mayores niveles de violencia. Reiniciada la protesta, se produjeron agresiones a legisladores y funcionarios. El 11 de mayo, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, fue hostilizado en su domicilio por manifestantes agrarios. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, también sufrió la presión de los militantes agrarios. Otros funcionarios y dirigentes fueron objeto de abusos, entre ellos el presidente de la Sociedad Rural. La acentuación de la tensión política suscitó importantes movilizaciones en favor del gobierno, y también sirvió para dotarlo de respaldos militantes en el campo intelectual, de los cuales el más importante fue el que le ofreció el grupo denominado Carta Abierta. En su primer pronunciamiento público, el 13 de mayo, Carta Abierta acuñó la calificación de “destituyente” para referirse a la protesta agraria, una expresión que desde entonces se volvió de uso muy frecuente entre los seguidores del gobierno³². Con todo, la movilización de estos apoyos intelectuales no alteró mayormente el universo de ideas con las que se asoció el conflicto, pues el gobierno optó por mantenerlo encuadrado dentro de parámetros retóricos que remitían a argumentos típicos de la tradición peronista (tales como la percepción de sus rivales agrarios como exponentes del polo negativo de nuestro pasado, y del peronismo como la única gran fuerza nacional y popular).

La principal novedad de esta segunda fase del conflicto radicó en la emergencia de una vasta movilización opositora en el escenario urbano. Hasta entonces, la protesta ruralista, aunque firmemente enraizada en las rutas y en los pueblos de los distritos sojeros, no había jugado su suerte en las grandes ciudades. En Buenos Aires, la causa del campo había sido acompañada por cacerolazos y pequeñas protestas callejeras que, expulsadas de los distritos céntricos, terminaron refugiándose en áreas residenciales de clase media y alta. Tras la tregua de abril, los dirigentes ruralistas se propusieron modificar este estado de cosas, y para ello llamaron a sus simpatizantes a una gran concentración el día 25 de mayo. Para los hombres de campo, con frecuencia más propensos a identificarse con el discurso patriótico que con ideologías o fuerzas políticas específicas, la coincidencia entre su reclamo y el aniversario de la Revolución de Mayo poseía un alto poder movilizador. Además de elegir una fecha central en el calendario patriótico –que por otra parte posee una larga tradición de celebración pública en el interior del país– los ruralistas optaron por congregarse en

³² *Página 12*, 15/5/2008.

un escenario amigable como Rosario. Cabecera de un importante distrito agrícola, y centro del gran complejo agroindustrial y portuario de la soja, la ciudad y sus alrededores se encontraban entre los mayores beneficiarios del crecimiento exportador verificado en la década previa. También había razones políticas que justificaban la elección de la segunda ciudad argentina como sede de la movilización. Además de gobernada por una fuerza opositora (el socialismo) que no iba a obstaculizar la organización o el desarrollo del acto, Rosario era un distrito donde el oficialismo había cosechado pobres resultados en las elecciones del año previo, y en el que predominaban facciones peronistas disidentes, muchas de las cuales fueron tomando distancia del gobierno nacional conforme el conflicto se profundizaba.

En el aniversario de la Revolución de Mayo, la convocatoria del campo logró congregarse una enorme multitud frente al Monumento a la Bandera, estimada en más de 200.000 personas. Se trató, quizás, del mayor acto público jamás realizado en la ciudad emblema de la soja. Ese día, el gobierno se vio obligado a conmemorar sus cinco años en el poder contemplando ya no sólo la vitalidad de los piquetes sino también el notable poder de movilización exhibido por sus rivales agrarios. La envergadura de esta concentración se advierte al observar que una voz hostil al reclamo del campo como la de Mario Wainfeld, un destacado periodista del diario *Página 12*, creyó posible “compararlo con las grandes movilizaciones de 1983, convocadas por Raúl Alfonsín o Italo Luder, o con la masiva acogida que tuvo el papa Juan Pablo II”³³.

En ese punto, las posibilidades de una salida negociada se fueron extinguiendo. En Rosario, los oradores ruralistas interpellaron a una multitud deseosa de escuchar críticas al gobierno, y en esas circunstancias sus discursos recurrieron a gestos combativos y fórmulas hirientes. En respuesta, dos días más tarde, el 27 de mayo, en su primera aparición pública como presidente del Partido Justicialista, Néstor Kirchner hizo aprobar un documento en el que esta agrupación calificaba al paro agrario como un “antidemocrático ataque con ánimo destituyente”³⁴. Esta resolución terminó de convencer a la Mesa de Enlace de que se habían roto todos los puentes con el gobierno. Pocas horas más tarde, los ruralistas anunciaron que, amén del paro de comercialización de hacienda y granos, también redoblarían sus esfuerzos propagandísticos y organizativos. Como parte de esta batalla, anunciaron la instalación de centros de propaganda en ciudades y pueblos, y declararon la necesidad de incrementar la presión sobre intendentes, gobernadores y dirigentes políticos. Y llamaron a “reforzar y profundizar las acciones sobre el Parlamento con el objeto de lograr por la vía legislativa las soluciones que el sector necesita”³⁵.

Este último desafío fue asumido como propio por la presidente Fernández de Kirchner tres semanas más tarde, cuando anunció el envío al Parlamento de un proyecto de ley dirigido a ratificar la Resolución 125. Esta medida, anunciada por cadena nacional el 17 de junio, tenía por objetivo cerrar una crisis que parecía no tener fin, y que en las dos semanas previas se había propagado en direcciones impensadas y cada vez más lesivas para la autoridad presidencial. Dos cuestiones

³³ Mario WAINFELD: “Mucha agenda para un feriado”, *Página 12*, 26/5/08.

³⁴ *Clarín*, 28/5/2008.

³⁵ *La Nación*, 28/5/08.

merecen especial atención. Por una parte, el 4 de junio los propietarios de camiones habían comenzado a erigir sus propios piquetes, sumando un nuevo foco de tensión. Hartos de esperar la normalización de su actividad, unos días más tarde los empresarios del transporte ya bloqueaban el tránsito en más de 100 rutas, y reclamaban airadamente que el Gobierno “encuentre una solución al conflicto que nos tiene sin trabajo más de dos meses”³⁶.

Al creciente desorden en las rutas se sumó una caótica movilización en la ciudad. El 14, el gobierno ordenó despejar el piquete de Gualeguaychú, y puso bajo arresto a Alfredo de Angeli. La detención del más conocido de los líderes de los autoconvocados, transmitida por televisión a todo el país, inmediatamente desató una ola de cacerolazos y protestas de gran intensidad. A las pocas horas, grupos de manifestantes opositores ocuparon la Plaza de Mayo. La residencia presidencial de Olivos también fue cercada por caceroleros. Ello motivó la reacción de grupos afines al gobierno, que forzaron a los manifestantes opositores a abandonar el terreno. El propio expresidente Kirchner, junto a varios ministros y secretarios de Estado, participaron de la disputa por la calle. Un par de días más tarde, la geografía de la protesta ruralista en la ciudad se extendió hacia distritos hasta entonces inmunes al contagio, mientras crecía también la osadía de los manifestantes. Así, por ejemplo, el 16 se produjeron algunos cacerolazos y manifestaciones callejeras en Constitución, Barracas, Flores y Boedo mientras que, en los alrededores de la residencia presidencial, pudo verse al vicepresidente de la Sociedad Rural participando de las protestas. Al día siguiente, el matutino *Página 12* advirtió sobre “la creciente adhesión que está logrando el reclamo entre los sectores medios urbanos de la Capital Federal y el interior del país”³⁷. Ninguno de estos episodios produjo víctimas, pero la percepción de que la agitación callejera podía desplegarse en nuevas direcciones se extendió. Y comenzaron los paralelismos con las jornadas de diciembre de 2001, cuando una vasta protesta de gran eco entre la clase media urbana contribuyó a derrumbar al gobierno del presidente Fernando de la Rúa³⁸. En ese momento, la presidente anunció que el Parlamento debía terciar en la disputa.

En principio, la sanción legislativa del régimen de retenciones, con el que el gobierno aspiraba a ponerle punto final a la crisis del campo, no debía ofrecerle dificultades. En los años previos, el poder Ejecutivo siempre había logrado recabar el apoyo del Congreso para los proyectos que impulsaba, a punto tal que el Parlamento había sido calificado en reiteradas oportunidades como una mera “escribanía” al servicio del Poder Ejecutivo. Con el fin de tornarlo más atractivo para los legisladores del interior que debían tratarlo, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo fijaba el monto del impuesto de acuerdo con la escala y la localización de las empresas agrarias, y a la vez contemplaba destinar un porcentaje determinado de lo recaudado a financiar programas de infraestructura y bienestar en las provincias. El 5 de julio, la iniciativa del Poder Ejecutivo fue aprobada por la Cámara de Diputados, aunque el número de legisladores que la acompañaron fue menor al esperado. Al calor de la presión de la movilización ruralista, tuvo lugar una importante escisión en el bloque

³⁶ *Página 12*, 11/6/08.

³⁷ *Página 12*, 17/6/08.

³⁸ *Página 12*, 17/6/08.

oficialista. Felipe Solá, que pocos meses antes había encabezado la lista de candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, tomó distancia del gobierno, y presentó un proyecto alternativo, refrendado por legisladores de Entre Ríos y Córdoba, dos distritos muy movilizadas por el reclamo agrario.

El resquebrajamiento de lo que hasta entonces había sido una sólida mayoría oficialista aumentó las expectativas depositadas en el tratamiento del proyecto en la Cámara de Senadores, donde la división del bloque oficialista pronto volvió a reproducirse, también motorizada por legisladores provenientes de distritos agrícolas. El 16, en vísperas de la votación, tanto el gobierno como el ruralismo realizaron actos públicos multitudinarios, destinados a incidir sobre el debate parlamentario. Néstor Kirchner, que en esta segunda fase del conflicto había adoptado una posición cada vez más predominante, habló ante una numerosa concurrencia, estimada en unos 100.000 manifestantes, en la Plaza del Congreso. En el acto oficialista hubo ausencias significativas. Además de los jefes sindicales de los peones rurales, que habían retaceado su apoyo al gobierno desde el inicio del conflicto, la erosión de los apoyos del gobierno dentro de la coalición oficialista se expresó en las ausencias de dirigentes de primera línea como el vicepresidente Julio Cobos y algunos gobernadores justicialistas.

En el mismo momento, en los Bosques de Palermo, los jefes de la Mesa de Enlace encabezaban un acto aún más concurrido, que dobló en asistentes al del oficialismo. El acto de Palermo terminó de confirmar que la vasta movilización del 25 de Mayo frente al Monumento a la Bandera no había sido un fenómeno aislado. Último episodio de la vasta movilización comenzada cuatro meses antes, la reunión de Palermo sirvió para terminar de fracturar lo que poco antes había sido una sólida y disciplinada mayoría parlamentaria. Al día siguiente, trece senadores hasta la víspera oficialistas se pronunciaron en contra del proyecto del Poder Ejecutivo, dejando la votación empatada. Abrieron así el camino para que el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, que en las semanas previas había tomado distancia de la titular del Poder Ejecutivo, resolviera la crisis en un sentido favorable a los ruralistas cuando, en la madrugada del 18, se inclinó por el rechazo del proyecto de retenciones móviles.

En el otoño de 2008, pues, la protesta del campo ganó la batalla por el control del espacio público no sólo en las rutas y en el interior sino también en la capital federal y las grandes ciudades. El ruralismo, un recién llegado al centro del escenario político, se mostró sorprendentemente eficaz para interpelar nuevos públicos y, gracias al eco que encontró su prédica, obligó a retroceder a una administración que hasta ese momento no había sufrido ningún tropiezo de consideración. La cohesión alcanzada por el heterogéneo arco de productores que animaron los piquetes no sólo desafió todos los pronósticos que insistían en la irreductible diversidad de intereses que habitan en el seno del ruralismo. Las dificultades del gobierno para poner coto a la generalizada protesta en las rutas dieron lugar a una crisis política que, conforme ganó en envergadura y tensión dramática, creó el escenario para una movilización urbana a favor de la posición del campo que constituye uno de los fenómenos políticos más originales y significativos de las últimas décadas. Analizar las condiciones que permitieron la construcción del ruralismo como una fuerza unificada, y que poco después lo dotaron de amplios apoyos urbanos, es el objetivo del apartado que sigue.

II. Las transformaciones del mundo rural

Una movilización tan masiva, a la vez que extendida sobre una geografía muy diversa, no puede comprenderse cabalmente sin atender a las circunstancias específicas que en cada provincia, y a veces en cada localidad, contribuyeron a dotarla de tintes peculiares. Factores tales como la existencia de una tradición previa de participación ciudadana, el grado de empatía (u hostilidad) entre los manifestantes agrarios y las autoridades locales y provinciales, las relaciones entre el poder federal y el gobierno provincial, o la capacidad de liderazgo de las dirigencias de base, contribuyeron a definir un panorama de gran complejidad en cuanto a la amplitud, la mecánica y el impacto de la protesta agraria. En las páginas que siguen dejaremos de lado esta diversidad para concentrar nuestra atención sobre aquellos rasgos que le dieron coherencia y unidad a la movilización del campo. Vista desde esta perspectiva, y como ya señalamos, la protesta del otoño de 2008 resulta original en al menos dos planos: por una parte, la intensidad y persistencia en el tiempo de la movilización; por la otra, el amplio apoyo social que concitó, dentro y fuera del sector rural.

La movilización de los productores rurales se torna más inteligible si se toman en cuenta a la vez las transformaciones de largo y de corto plazo que contribuyeron a hacerla posible. El aspecto medular de las primeras se refiere a la decisiva modificación en la estructura de propiedad de la región pampeana gestada en los treinta años que siguieron a la sanción de la ley de arrendamientos de octubre de 1943. La importancia de la norma legal sancionada por la Revolución de los Coroneles no podría exagerarse, ya que ella erradicó, de manera lenta pero sostenida, el sistema de arrendamiento agrícola que había cobrado forma durante la gran expansión agropecuaria de comienzos del siglo XX. Hasta entonces, parte importante de la producción de cereales tenía lugar en empresas pequeñas y medianas, que funcionaban en tierras alquiladas, muchas veces dentro de grandes propiedades (estancias o colonias). El deterioro de la situación de los chacareros arrendatarios durante la década de 1930, acentuado durante los primeros años de la Guerra Mundial, llevó a los jefes del golpe de 1943 a promover una reforma del estatuto de los arrendatarios de considerable importancia, cuyo impacto más duradero se sintió en el mediano y largo plazo. Los aspectos más relevantes de la modificación del régimen de locación de predios rurales fueron dos: impuso una rebaja compulsiva de los cánones de arrendamiento y prohibió la expulsión de los locatarios. A lo largo de sus cinco quinquenios de vigencia, y como consecuencia de esta reforma, los grandes propietarios rentistas –el grupo más parasitario de la economía rural pampeana–, vieron reducidos tanto sus ingresos (por el congelamiento en un contexto inflacionario) como su capacidad de disponer libremente de sus tierras (que sólo podían recuperar o vender con el consentimiento expreso de sus inquilinos)³⁹.

La ley de congelamiento de arrendamientos, sumada al trabajo lento pero incesante de la partición hereditaria, aceleró la desaparición de las grandes propiedades sobre las que se erigían las fortunas de la elite rural de la era agroexportadora, y permitió el acceso de un número muy considerable de chacareros arrendatarios a la propiedad del suelo. Este fenómeno favoreció la conformación de

³⁹ Hora, *Los terratenientes*, pp. 329-332; Osvaldo BARSKY y Jorge GELMAN: *Historia del Agro Argentino. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Mondadori, 2001 pp. 317-21.

una estructura de propiedad de signo mesocrático. Aunque imperfectamente (ya que sólo captan un momento del proceso), los censos agrarios de 1947 y 1969 permiten estimar la magnitud de esta transformación en la estructura de tenencia de la tierra pampeana. Entre ambas fechas, la superficie arrendada en la región cayó de 27 a 13,5 millones, mientras que la trabajada por sus dueños (agrícola y ganadera) subió de 37,3 a 54,6 millones de hectáreas. Para 1969, los propietarios laboraban el 73 % de la tierra pampeana, mientras que los arrendatarios sólo controlaban el 18 % del suelo de la región⁴⁰. Al calor de estos procesos, en esos años se produjo una sensible reducción en el tamaño medio de las grandes explotaciones agrarias, dando forma a un fenómeno que ha sido denominado de “desconcentración sin dispersión”⁴¹.

Las políticas de precios vigentes durante este período, que privilegiaron a la economía urbana por sobre la producción agropecuaria, desincentivaron el ingreso de grandes capitales capaces de revertir el proceso de consolidación de una agricultura de empresas medianas. Todo ello tuvo, además de consecuencias económicas que no tenemos ocasión de tratar aquí, un impacto político decisivo. Con la desaparición de las formas tradicionales de arrendamiento y la pérdida de gravitación de los grandes terratenientes ausentistas se esfumó el principal motivo de tensión que había signado a las cuencas agrícolas en la conflictiva etapa que corre entre el Grito de Alcorta de 1912 y la Segunda Guerra Mundial. Una vez que las diferencias más agudas en torno a la distribución de la renta agraria al interior del sector rural fueron entrando en la historia, aumentó el margen objetivo para el establecimiento de alianzas capaces de comprender al empresariado rural en su conjunto⁴². Desde entonces, la confluencia de la Federación Agraria y la Sociedad Rural –para nombrar a las dos organizaciones que expresan los dos puntos extremos del universo productivo pampeano– en materia de políticas públicas que afectan a todos los productores se volvió si no inevitable, al menos más factible.

Intereses más homogéneos contribuyeron a diluir las viejas querellas que separaban a los productores y, de modo más paulatino, fijaron una nueva agenda para sus organizaciones representativas. La colaboración, surgida tibiamente en los años setenta, cobró formas más explícitas desde la década de 1990. El programa conjunto que la SRA, la FAA, CRA y CONINAGRO presentaron a las autoridades en 1994 refleja bien la confluencia de intereses y perspectivas que, más de una década antes de la formación de la Mesa de Enlace, ya se había camino tanto entre los productores como entre sus dirigentes⁴³. Ese programa fue el resultado de un trabajo conjunto de los equipos técnicos de estas cuatro organizaciones, de creciente relevancia desde entonces. En la segunda mitad de la década de 1990, el diálogo entre los dirigentes ruralistas, la colaboración entre técnicos y las declaraciones de prensa conjuntas se volvieron frecuentes⁴⁴. En abril de 1999, las cuatro asociaciones

⁴⁰ Hora, *Los terratenientes*, p. 331.

⁴¹ Osvaldo BARSKY y Alfredo PUCCIARELLI: “Cambios en el tamaño y el régimen de tenencia de las explotaciones agropecuarias pampeanas”, en O. BARSKY (editor): *El desarrollo agropecuario pampeano*, Buenos Aires, INDEC/INTA/ICA, 1991, pp. 321-27.

⁴² El punto es destacado por Tulio HALPERIN DONGHI en su *La larga agonía de la Argentina peronista*, Buenos Aires, Ariel, 1994.

⁴³ Sobre este programa, LATTUADA: *Acción colectiva y corporaciones agrarias*, pp. 201-3.

⁴⁴ *La Nación*, 14/6/2008.

acordaron un plan de protesta que fue presentado como “una señal de unión” entre los hombres de campo⁴⁵. En 2006, la exposición de Ganadería de Palermo fue inaugurada por los presidentes de tres de ellas, SRA, CRA y CONINAGRO⁴⁶. El gesto resultó significativo tanto porque se trataba de la primera vez que los directivos de CRA y CONINAGRO eran invitados a desempeñar el papel protagónico en el principal evento del calendario ruralista como porque el acto tuvo lugar en un clima de hostilidad hacia el gobierno nacional. En esos momentos, el presidente de la Sociedad Rural, Luciano Miguens, declaraba que “los productores siempre nos preguntan por qué hay cuatro entidades y no una sola mucho más fuerte. En ese sentido, venimos trabajando juntos desde los años 90... en los grandes objetivos somos un sólo bloque, y en los intereses particulares cada entidad va por su lado”⁴⁷. Dos meses más tarde, CRA, FAA y SRA sumaron fuerzas en un paro ganadero de nueve días. Cuando el mismo concluyó, algunos de sus protagonistas celebraron “la unidad demostrada por el sector agropecuario a pesar de las diferencias ideológicas y metodológicas que persisten en su interior”⁴⁸.

En los últimos veinte años, esta comunidad de productores, heterogénea pero cada vez menos antagónica, y por tanto más proclive a promover la unidad en su accionar y discurso se volvió, también, económicamente más dinámica y poderosa. El largo ciclo de expansión agrícola que se extiende hasta nuestros días tuvo sus inicios en la primera mitad de la década de 1960. En ese momento, la mecanización y la incorporación de semillas híbridas permitieron que la agricultura pampeana recuperara tierras que habían sido entregadas a la ganadería en las dos décadas previas y retomara la senda de crecimiento abandonada cuando el mercado mundial para las exportaciones pampeanas comenzó a cerrarse en los años treinta. Entre la presidencia de Illia y el tercer mandato de Perón, la producción de cereales y oleaginosas experimentó un incremento sostenido, superior al 5 % anual⁴⁹. Sin embargo, ese crecimiento palidece frente a la notable expansión iniciada a mediados de la década de 1990, momento a partir del cual la producción de cereales y oleaginosas pasó de 42 a casi 96 millones en menos de veinte años, creciendo al 7 % anual. Para encontrar un auge de dimensiones equivalentes es preciso retrotraerse al *boom* cerealero de la primera década del siglo XX, cuando la Argentina se convirtió en uno de los cinco mayores exportadores mundiales de granos.

El crecimiento agrícola de los tres quinquenios a la crisis del campo se alcanzó sin que las dos actividades que le disputan el uso de la tierra, la ganadería y la lechería, vieran menguado su producto. Pese a la contracción de la superficie ocupada por la ganadería en la región pampeana, que perdió unos 5/6 millones de hectáreas en los quince años posteriores a 1990, la intensificación de la producción (mejora genética, engorde a corral, etc.) y el desplazamiento de la cría fuera de la región pampeana permitieron un incremento del stock vacuno y la producción de carne de alrededor del 20 %. En el mismo período, mejoras de eficiencia productiva

⁴⁵ *La Nación*, 5/4/1999.

⁴⁶ *La Nación*, 30/7/2006.

⁴⁷ *La Nación*, 7/10/2006.

⁴⁸ *La Nación*, 12/12/2006.

⁴⁹ Pablo GERCHUNOFF y Lucas LLACH: *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Ariel 1998, p. 313.

y aumento de la escala de las empresas dieron por resultado un importante aumento de la producción láctea, que pasó de unos 6.000 a más de 10.000 millones de litros, más que duplicando sus tasas de crecimiento del medio siglo previo⁵⁰. Sin embargo, esta expansión de la producción de carne y leche se vio opacada por el espectacular y simultáneo desarrollo de la agricultura al que ya se ha hecho referencia. El gran salto adelante de las últimas dos décadas fue resultado de la combinación de incrementos de productividad y expansión sobre nuevas tierras, hechos posibles por la incorporación de nuevas tecnologías como la siembra directa (es decir, sin arado ni labranza) y las semillas transgénicas. Gracias a la veloz adaptación de estos desarrollos tecnológicos, las empresas agrícolas argentinas se colocaron cerca de la frontera internacional en la materia, y lograron expandirse sobre nichos ecológicos más hostiles. Estos avances tuvieron su punta de lanza en la formación de nuevos tipos de empresas, de mayor escala, más eficientes y rentables, que ganaron espacio a costa de las formas familiares de organización de la producción⁵¹.

Además de importantes ganancias de productividad y (donde la siembra directa reemplazó a la labranza tradicional) probablemente también en la conservación del suelo, la expansión de la agricultura se apoyó sobre una muy considerable ampliación de la superficie sembrada con cereales y oleaginosas (en primer lugar, el doble cultivo liderado por la dupla soja/trigo), que en el curso de los dos decenios previos a la crisis del campo saltó de 20 a 31 millones de hectáreas⁵². Dentro de la región pampeana, la expansión agrícola avanzó sobre tierras ganaderas, a las que restó más de 2 millones de hectáreas. Más decisiva fue la expansión del área implantada con granos fuera de la pampa húmeda. La siembra directa y las semillas genéticamente modificadas permitieron que la región dominada por cultivos para exportación desbordase los límites que hasta entonces habían encerrado a la agricultura del cereal, incorporando a su área de influencia distritos más secos o con suelos de menor calidad. Desde que la soja transgénica (RR) comenzó a ser cultivada, esta oleaginosa experimentó un desarrollo impactante en regiones periféricas. Entre 1995 y 2008, el cultivo de soja aumentó de 150.000 a 1.420.000 ha en Entre Ríos, de 70.000 a 750.000 ha en Chaco, de 120.000 a 477.000 ha en Salta, de 95.000 a 830.000 ha en Santiago del Estero, de 85.000 a 290.000 ha en Tucumán⁵³.

Impulsada por su superior rentabilidad, la soja se constituyó en la punta de lanza del avance de la agricultura de exportación sobre algunos cultivos regionales (como el algodón en Chaco y en Salta), sobre tierras ganaderas y sobre bosques y montes que no habían conocido el arado. En algunos distritos, la expansión de la

⁵⁰ Roberto BISANG: "El desarrollo agropecuario en las últimas décadas: ¿volver a creer?", en Bernardo KOSACOFF (editor): *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007*, Buenos Aires, CEPAL, 2007; BARSKY y DÁVILA: *La rebelión del campo*, pp. 21-23.

⁵¹ Mercedes CAMPI: "Cambios históricos en la frontera agraria pampeana. La tecnología y el uso de la tierra", Tesis de Maestría en Investigación Histórica, Universidad de San Andrés, 2008, pp. 127-163.

⁵² Las ventajas de la siembra directa para la conservación del suelo son objeto de debate. Existen interrogantes para los que, por el momento, no parece haber respuestas concluyentes. Véase Rodolfo GIL y A. GARAY: "La siembra directa y el funcionamiento sustentable del suelo", en José Luis PANIGATTI, Daniel BUSCHIAZZO y Hugo MARELLI (editores): *Siembra directa II*, Buenos Aires, Ediciones del INTA, 2001.

⁵³ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, SSIA, Estimaciones Agrícolas.

soja enfrentó protestas de grupos ambientalistas y poblaciones campesinas⁵⁴. Su principal consecuencia política, sin embargo, fue otra. La sojización de la periferia supuso una importante ampliación de la base social y regional de los intereses identificados con la agricultura de exportación pampeana. Tal como lo muestra la geografía de los piquetes agrarios del otoño de 2008, el anillo sojero de este interior pampeanizado se mostró muy dispuesto a movilizarse políticamente, sin duda porque en esas tierras alejadas y de inferior calidad los menores rindes por hectárea y los mayores costos de transporte hicieron que la punición de gravámenes como las retenciones se sienta allí con particular intensidad.

El crecimiento agrícola que cobró impulso en la década de 1990 tuvo un punto de inflexión tras el derrumbe económico del verano de 2001/2. Desde entonces, precios internacionales en alza y un tipo de cambio que súbitamente se tornó muy favorable luego de la abrupta devaluación de la moneda nacional le otorgaron un vigor inusitado. Este nuevo ciclo de expansión de la economía exportadora contrastó con el paisaje de ruinas que, tras la crisis de fines de 2001, se advertía en otras actividades más afectadas por el colapso del sistema financiero, la contracción del ingreso y el derrumbe de la moneda nacional. En el curso de unos pocos años cobró fuerza la idea de que la agricultura de exportación se erigía como la más poderosa locomotora del crecimiento argentino en el nuevo siglo, superando en dinamismo al sector manufacturero, que para entonces también comenzaba a recuperarse de un retroceso de más de dos décadas. Reflejando este nuevo humor, entre los propios protagonistas de la actividad agropecuaria se volvieron habituales expresiones como las de Luciano Miguens, presidente de la Sociedad Rural Argentina, que en octubre de 2006 afirmaba sin hesitar que “el campo ha despuntado como el sector económico más pujante de la Argentina”, o de Mario Llambías, el presidente de CRA, que insistió repetidamente en que la soja es el “cultivo que sacó al país de la crisis en 2001”⁵⁵.

El desarrollo exportador del nuevo siglo echó un manto de olvido sobre el proceso de destrucción de la economía familiar que desgarró a la campaña en la década de 1990, cuando unas 80.000 explotaciones agropecuarias desaparecieron. En esa etapa dominada por la apertura comercial y el atraso cambiario, muchas empresas familiares que no lograron crecer en escala o adoptar tecnología más moderna (y más costosa) debieron abandonar la actividad. La crisis de la economía familiar –una forma de organización que había constituido parte central del paisaje pampeano desde la llegada de la agricultura de exportación a la región en la segunda mitad del siglo

⁵⁴ Norma GIARRACA y Carla GRAS: “Conflictos y protestas en Argentina de finales del siglo XX con especial referencia a los escenarios regionales y rurales”, en Norma GIARRACA (compiladora): *La protesta social en Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*, Buenos Aires, Alianza, 2001. Al igual que la siembra directa, el empleo de semillas transgénicas ha suscitado numerosas controversias, y los expertos aún no han alcanzado un consenso en torno a sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Algunos aspectos del debate en Otto SOLBRIG: “Ventajas y desventajas de la agrobiotecnología”, en Alicia BÁRCENA, Jorge KATZ, César MORALES y Marianne SCHAPPER (editores): *Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un debate abierto*, Santiago de Chile, CEPAL, 2004; Eduardo TRIGO, Daniel CHUDNOVSKY, Eugenio CAP y Andrés LÓPEZ: *Los transgénicos en la agricultura argentina. Una historia con final abierto*, Buenos Aires, IICA/Libros del Zorzal, 2002; Miguel TEUBAL: “Soja transgénica y crisis del modelo agroalimentario argentino”, *Realidad Económica*, Nº 196 (2003).

⁵⁵ *Clarín Rural*, 21/10/2006; *La Nación*, 12/3/2008. Expresiones similares en *Fortuna*, 2/1/2006.

XIX– alcanzó en su momento una vasta repercusión, y en gran medida opacó las transformaciones tecnológicas y productivas que constituían el otro rostro del proceso de cambio productivo en curso en los años noventa. Sus efectos más dramáticos se advirtieron en la segunda mitad de esa década, cuando una baja considerable de los precios internacionales de los granos golpeaba con particular dureza a las empresas más pequeñas o menos eficientes, al mismo tiempo que, luego de la Crisis del Tequila (1994), las condiciones crediticias se endurecían. En ese momento, agrupaciones como el Movimiento Nacional de Mujeres en Lucha, conocido a través de la emblemática figura de Lucy de Cornelis, contribuyeron a darle visibilidad y dramatismo a la agonía de la agricultura familiar en la región pampeana. En esos años, Mujeres en Lucha obstaculizó más de 500 remates de campos de pequeños propietarios endeudados con la banca pública. Para ello, recurría a medidas de acción directa como entonar el Himno Nacional, y a veces también rezos religiosos, de modo de dificultar la tarea del rematador en el momento en que éste se disponía a subastar la propiedad endeudada⁵⁶.

La última intervención de resonancia de Mujeres en Lucha tuvo lugar en septiembre de 2003. Para entonces, estas defensoras de la agricultura familiar tradicional ingresaban en un cono de sombra, en primer lugar porque tras la gran devaluación de comienzos de 2002 aumentó tanto la rentabilidad agraria como el precio del suelo (se triplicó en apenas 5 años), mientras que las deudas de los productores con la banca pública, licuadas por la pesificación, se contraían abruptamente⁵⁷. En el nuevo escenario que en esos años terminó de definirse, dominado por el incremento de la escala de las empresas y el cambio tecnológico, muchos pequeños propietarios tuvieron dificultades para preservar su autonomía productiva. Pero incluso para quienes no lograron hacerlo, la formidable expansión agrícola del nuevo siglo les permitió disfrutar de rentas muy considerables, que obtenían gracias a la cesión de sus tierras, y que a menudo combinaban con ingresos provenientes de su participación en el expansivo universo de la provisión de servicios (siembra, cosecha, fumigación, transporte, etc.)⁵⁸. La importancia de estas últimas actividades se advierte al recordar que, en los últimos años, al menos dos tercios de las tareas necesarias para la producción agrícola son llevadas adelante por unidades económicas independientes de los propietarios del suelo.

En la región pampeana, este proceso de retracción de la pequeña empresa rural y de expansión de las empresas de servicios vino a acentuar un cambio en el patrón residencial de la población vinculada a la actividad primaria cuyo origen se remonta a varias décadas atrás. El peso creciente del contratismo aceleró el desplazamiento de muchas familias chacareras hacia centros urbanos vecinos, en

⁵⁶ Esta experiencia es analizada en Norma GIARRACA: "El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Protesta agraria y género en el último lustro en Argentina", en Norma GIARRACA (compiladora): *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Buenos Aires, Clacso, 2002, pp. 103-129; Karina BIDASECA: "El Movimiento de las Mujeres Agropecuarias en Lucha: acciones colectivas y alianzas transnacionales", en Elizabeth JELIN (compiladora): *Más allá de la Nación: las escalas múltiples de los movimientos sociales*, Buenos Aires, El Zorzal, 2003; y Lattuada, *Acción colectiva y corporaciones agrarias*, cit., pp. 219-34.

⁵⁷ Oscar CETRÁNGOLO, Daniel HEYMANN y Adrián RAMOS: "Macroeconomía en recuperación: la Argentina poscrisis", en B. KOSACOFF (editor): *Crisis, recuperación y nuevos dilemas*, p. 39.

⁵⁸ Algunos ejemplos en Clara CRAVIOTTI y Carla GRAS: "De desafilaciones y desligamientos: trayectorias de productores familiares expulsados de la agricultura pampeana", *Desarrollo Económico* 46:181 (2006).

busca de mejor calidad de vida, mayor oferta educativa y recreativa, o ámbitos de sociabilidad más amplios y atractivos. Como resultado del despoblamiento del campo, el aislamiento de los agricultores se atenuó, mientras que la vida de las pequeñas urbes enclavadas en las cuencas graníferas se volvió más sensible a las alzas y bajas de la actividad rural⁵⁹. Este cambio del patrón residencial ayudó a que, en la fase de prosperidad y expansión que siguió a la crisis de 2001/2002, la mejora del ingreso de los empresarios, contratistas y trabajadores rurales tuviese un rápido impacto sobre el medio urbano, ayudando a que el recuerdo del doloroso proceso de desaparición de pequeñas empresas familiares de la década de 1990 perdiese gravitación en la representación que el sector rural y su entorno forjan de sí mismos. Y ello contribuyó a que, al mismo tiempo que las voces críticas se acallaban o se tornaban menos audibles, surgiesen con renovados bríos otros discursos que promovían una visión alternativa del sector rural, presidida por conceptos tales como modernidad, dinamismo y crecimiento.

Entre los actores que con mayor constancia promovieron este proyecto se cuentan las nuevas organizaciones que nuclean al empresariado agrario de mayor envergadura. En las últimas dos décadas, el campo, un sector tradicionalmente reacio a la innovación institucional, dio vida a un nuevo universo de asociaciones, casi todas ellas de perfil más técnico que gremial. En este grupo se destacan AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa), MAIZAR (Asociación Maíz Argentino) y ACSOJA (Asociación de la Cadena de la Soja Argentina), que se sumaron a la pionera AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), creada en 1957. Estas organizaciones desempeñaron un papel de considerable importancia en la renovación de la imagen pública del agro. Todas ellas actuaron como promotores del cambio productivo pero también como propagandistas de una actividad a la que describen ya no como tecnológicamente atrasada sino como la más moderna y competitiva del país. Parte importante de las iniciativas de estos voceros del nuevo ruralismo se dirigen hacia el propio empresariado agrario, al que interpelan en calidad de vanguardia productiva de la economía nacional⁶⁰. Tampoco faltan las acciones apuntadas hacia públicos más amplios, toda vez que éste es percibido como receptivo ante el mensaje de este renovado ruralismo. Así, por ejemplo, la batalla por cambiar la imagen pública del sector rural comprendió iniciativas como el programa de radio titulado, sintomáticamente, *Darse Cuenta*, emitido por Radio Continental con el apoyo de AAPRESID. Actores más tradicionales del universo ruralista también se han movido en el mismo sentido. La Sociedad Rural, por ejemplo, ha puesto en el aire *Hombres de Campo*, un programa conducido por el periodista Oscar Gómez Castañón que América TV emite desde 2007.

⁵⁹ La tendencia de largo plazo es explorada en Javier Balsa: *El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura bonaerense, 1937-1988*, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2006, pp. 161-241. En 1947, en los partidos agrícolas del norte de la provincia de Buenos Aires, el 47 % de la población residía en el campo; para 2002, este porcentaje se había reducido al 6 %. Véase Balsa: "Cambios y continuidades en la agricultura pampeana entre 1937 y 2002. La zona agrícola del norte bonaerense", en Javier Balsa, Graciela MATEO y María Silvia OSPITAL, *Pasado y Presente en el Agro Argentino*, Buenos Aires, Lumiere, 2008, pp. 605-07.

⁶⁰ El caso de AAPRESID es analizado en Valeria A. HERNÁNDEZ: "El fenómeno económico y cultural del boom de la soja y el empresariado innovador", *Desarrollo Económico* 47:187 (2007).

El tejido asociativo desarrollado al compás de las transformaciones tecnológicas de las últimas dos décadas también sirvió de plataforma para la conformación y difusión de nuevos modelos de empresarios. Figuras como Víctor Trucco (presidente de AAPRESID) y, sobre todo, Gustavo Grobocopatel, el “Rey de la Soja”, tuvieron un papel de considerable relevancia en la construcción de una imagen pública del empresariado agrario que destaca su empuje y su modernidad. El eco alcanzado por estos nuevos modelos de capitalistas agrarios se advierte incluso en sectores tradicionalmente ajenos a la prédica y las posiciones del ruralismo, como lo pone de relieve el hecho de que en 2003, el año en que la crisis comenzó a quedar atrás, la prensa especializada eligiese a Grobocopatel como el empresario más destacado del año, o que en 2004 esta figura –que simboliza como ninguna otra la transformación del empresariado agrario– haya sido distinguido por el Senado de la Nación⁶¹. La renovación de las prácticas empresariales expresada por estos hombres de negocios también ha hecho sentir su influjo en ámbitos que suelen recelar de las virtudes de la función empresarial. Así, por ejemplo, en 2004, y pese a sus reservas, una nota del suplemento económico del diario *Página 12* señalaba que “el campo es hoy un sector de alta tecnología”, y que Grobocopatel, “referente del sector” y “emergente de un nuevo paradigma productivo”, encarnaba como pocos en nuestro país “la imagen mítica del empresario schumpeteriano”⁶².

La amplitud alcanzada por esta visión positiva del agro y sus empresarios merece destacarse, pues en los años previos a la disputa del 2008 ganó espacio incluso entre los encargados de orientar la política económica del gobierno kirchnerista. Una protesta agropecuaria en diciembre de 2006 dio lugar a un debate en el que afloraron visiones contrapuestas sobre las potencialidades del empresariado rural. Según el relato ofrecido por *Página 12*, el presidente Kirchner “los denuesta tratándolos de ‘oligarcas’. Pero sectores técnicos del Gobierno los reivindicaron por haber aprovechado el 1 a 1 para invertir en tecnología y hacer ‘el campo más competitivo del mundo’”⁶³. Los juicios negativos sobre los hombres de campo vertidos por el primer mandatario no impidieron que, unos meses más tarde, su administración propiciara la expansión de los negocios del Rey de la Soja en la Venezuela de Hugo Chávez. En la tierra de la Revolución Bolivariana, el Grupo Los Grobo se asoció con la estatal PdVSA Agrícola con el fin de implementar los sistemas de producción y gestión que con tanto éxito había desarrollado en la pampa. Para entonces, el sector estatal argentino, a través del INTA, también comenzaba a exportar la tecnología de la siembra directa a la ex república soviética de Kazajstán⁶⁴.

El escenario que sucedió a la crisis del 2001/2 se caracterizó, en síntesis, por una notable expansión productiva y una aceleración de los procesos de cambio tecnológico en la producción agrícola, que vino acompañada por un marcado incremento y una distribución geográficamente más amplia del ingreso agrario. Recortado el ámbito de influencia de las unidades agrícolas familiares, sus principales promotores fueron empresas más capitalizadas y modernas, que recurren

⁶¹ Daniel CASAS: “Gustavo Grobocopatel: el ambicioso rey de la soja”, *La Nación*, 6/12/2007.

⁶² Claudio SCALETTA: “Líder del nuevo modelo productivo”, *Página 12, Suplemento Cash*, 25/4/2004.

⁶³ Cledis CANDELARES: “Tribulaciones campestres”, *Página 12*, 5/12/2006.

⁶⁴ *Clarín*, 14/11/2006.

asiduamente a la contratación de insumos y servicios (y con frecuencia también de tierras) en el mercado. Gracias a la devaluación y el alza de los precios internacionales, la demanda de bienes de capital, de consumo e intermedios generada por estas empresas y sus redes de proveedores comenzó a impactar círculos cada vez más amplios, primero en los pueblos y ciudades de las cuencas exportadoras, y algo más tarde en las grandes urbes del litoral, donde también se volcó parte considerable del ingreso generado por el crecimiento exportador. Este proceso alcanzó mayor envergadura gracias al desarrollo de nuevas actividades agroindustriales que incorporan valor a la producción primaria. En vísperas del conflicto de 2008, la Argentina se había convertido en el tercer productor y exportador mundial de soja en granos y en el primer proveedor global de harinas y aceites derivados de esta oleaginosa. Ciudades pequeñas y medianas como Venado Tuerto o Pergamino, o grandes urbes como la ya mencionada Rosario, experimentaron una considerable mejora, de impacto generalizado (aunque sin duda desigual) sobre sus habitantes. Pergamino, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes, tenía en vísperas del conflicto 17 casas bancarias⁶⁵. En los distritos más dinámicos, el desempleo –esa gangrena social que se ganó un lugar central en la vida argentina en la década de 1990– se redujo de manera visible⁶⁶.

Un importante elemento a destacar es que, en la percepción de sus propios protagonistas, la naturaleza de este auge productivo resulta radicalmente distinta de la del ciclo de desarrollo industrial que la precedió. Lejos de depender del subsidio o la protección del Estado, el crecimiento del agro y sus anexos industriales aparece como un mérito exclusivo del sector, pues resulta del aprovechamiento de las ventajas comparativas de la economía argentina y el despliegue de los talentos de su empresariado. De allí que en estos años volviese a cobrar renovada vigencia uno de los núcleos ideológicos fundantes del ideario ruralista de la etapa del *boom* exportador de la *Belle Époque*: el que concibe al Estado como un peso muerto sobre las espaldas de una comunidad de productores que es, además, el núcleo dinámico de la economía por excelencia⁶⁷. En los años previos a la crisis del campo, estos argumentos se escucharon en reiteradas ocasiones, como por ejemplo en un discurso de Hugo Biolcati de 2006, en el que, confiando en la empatía de las audiencias rurales a las que se dirigía, el vicepresidente de la Sociedad Rural se preguntaba de manera retórica “¿cómo se creen que estamos saliendo de la crisis? ¿Quiénes creen que se pusieron el país al hombro para sacarlo de la situación en que se encontraba?”⁶⁸ El extendido empleo de este tipo de metáforas, que describen al sector rural como el gran motor del capitalismo argentino, pone de relieve la existencia de un empresariado rural seguro de sí mismo y convencido de su importancia como promotor de desarrollo,

⁶⁵ Véase, por ejemplo, la descripción de la arrogante prosperidad de los sectores medios de Pergamino ofrecida por un cronista de *Página 12* el 23/3/2008.

⁶⁶ Una descripción de estos cambios en Roberto BISANG, Guillermo ANLLÓ y Mercedes CAMPI: “Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina”, *Desarrollo Económico* vol. 48:190-191 (2008). El impacto del crecimiento agrario sobre el empleo es analizado en Juan José LLACH, Marcela HARRIAGUE y Ernesto O’CONNOR: *La generación de empleo en las cadenas agroindustriales*, Buenos Aires, Fundación Producir Conservando, 2004.

⁶⁷ HORA: *Los estancieros contra el Estado*, pp. 55-82.

⁶⁸ El discurso de Biolcati puede verse en: www.ruralarg.org.ar/web/notas.php?id=2598

cuyo discurso alcanza un eco particularmente intenso pues opera sobre una comunidad de productores más homogénea, a la vez que menos afectada por el tipo de conflictos que en el pasado la dividieron, y también más capaz de concitar un amplio arco de solidaridades sociales y regionales.

El renacimiento de lo que puede calificarse como la vocación hegemónica del sector rural tuvo lugar en un contexto que, como nunca en medio siglo, encuentra terreno fértil para propagarse. En una entrevista reciente, Aldo Ferrer manifestaba su disconformidad ante la idea “que se ha impuesto de que el campo se pone el país al hombro y lo saca adelante”⁶⁹. Esta afirmación se halla subtendida por una saludable desconfianza frente a las voces que proclaman a voz en cuello el poder redentor del sector rural. Nos recuerda que, pese a la creciente relevancia de la nueva agricultura y sus anexos industriales, la construcción de una economía capaz de amplificar el crecimiento y revertir el cuadro de acentuada desigualdad social que caracteriza a nuestro país difícilmente pueda alcanzarse sin el desarrollo simultáneo de otras actividades productivas. Sin embargo, el hecho mismo de que en estos últimos años el potencial de la agricultura de exportación y sus anexos industriales sea una y otra vez enfatizado invita a preguntarse por las razones del influjo de estos argumentos en segmentos de la opinión que no poseen relación directa con la actividad agropecuaria, pero que en la crisis del campo manifestaron su simpatía –y en más de un caso tomaron posición activa– en favor del reclamo agrario. Parece razonable argumentar que algunos actores se sintieron interpelados por la protesta del campo a partir de su hostilidad a la administración kirchnerista, o que las fuerzas opositoras aportaron su capacidad de movilización a una causa que, por primera vez en cinco años, les ofrecía la oportunidad de desafiar al gobierno en la calle. Sin embargo, sería errado concluir que el grueso de los manifestantes que se sumó a los actos públicos en favor del campo en los grandes centros urbanos era completamente indiferente ante las cuestiones sustantivas que se hallaban en debate. De hecho, otras iniciativas gubernamentales que también fueron mal recibidas por los mismos sectores que acompañaron el reclamo agrario (en particular las clases medias urbanas) no generaron reacciones similares entre la población, aun cuando actores de peso del campo político y periodístico promovieron activamente su politización. Así, por ejemplo, pese a la energía que los principales medios de comunicación privados del país y una parte muy considerable de los partidos de oposición pusieron en la denuncia del proyecto de ley de servicios audiovisuales promovido por el gobierno en agosto-octubre de 2009, todos los esfuerzos destinados a propiciar la protesta callejera contra las iniciativas oficialistas en este terreno terminaron en el fracaso.

La protesta del campo del año 2008 alcanzó un eco inusitado en ámbitos sociales y políticos muy distintos –primero en los pueblos de la campaña y en el interior sojero, tanto en distritos gobernados por peronistas como por opositores, luego en la socialista Rosario, y finalmente en la ciudad de Buenos Aires, principal escenario de la política nacional– porque el deterioro experimentado por la estrategia de desarrollo adoptada por la Argentina tras la Gran Depresión, la industrialización por sustitución de importaciones en una economía semicerrada, ha visto erosionado su poder movilizador

⁶⁹ La entrevista a Ferrer en www.unr.edu.ar/digiblog_notas/1622/aldo_ferrer.

y sus bases de apoyo. Conviene recordar que los logros del programa industrialista en el tercer cuarto del siglo pasado fueron lo suficientemente importantes como para rodear a esta opción de desarrollo de un vasto sustento. Aun cuando en la segunda posguerra la Argentina perdió terreno frente a naciones más exitosas, la mejora del ingreso por habitante verificada entre 1945 y 1975 (1.97 % anual) fue la más alta de nuestra historia desde que existen registros estadísticos, incluso por encima de la que tuvo lugar en la etapa de expansión agropecuaria previa a la Gran Depresión (1.68 % anual entre 1884 y 1929)⁷⁰. A lo largo de un tercio de siglo, pues, la apuesta al sector industrial (primero impulsada por la expansión del consumo popular y, desde la década de 1960, cada vez más por el desarrollo de sectores más intensivos en capital) se tradujo en crecimiento económico e incremento del bienestar popular. Sobre esta sólida base se edificó el amplio acuerdo social que privilegiaba a la producción manufacturera volcada hacia el mercado interno por sobre los sectores agrarios con capacidad exportadora.

Entrado el último cuarto del siglo XX, esta opción de desarrollo exhibió un rendimiento insatisfactorio, cuyo indicador más ominoso es el catastrófico derrumbe que experimentó el ingreso por habitante en la etapa que corre entre 1975-1990 (-1.34 % anual). Como ya han señalado otros estudios, el profundo deterioro económico experimentado en esos años contribuyó a crear las condiciones sociales que hicieron posible el drástico programa de apertura de los mercados impulsado por el gobierno del presidente Carlos Menem en la primera mitad de la década de 1990, que puso fin al para entonces maltrecho proyecto de economía semicerrada surgido en la década de 1940⁷¹. Los triunfos electorales alcanzados por el sector del peronismo convertido al credo liberal en 1991 y 1993, y la reelección de Menem como presidente en 1995, dan cuenta de la amplitud de los apoyos que recibió este proyecto en su fase más exitosa y expansiva, cuando el retroceso de muchas ramas industriales que producían para el mercado interno y la pérdida de empleo en el sector manufacturero convivieron con la estabilización de precios y el auge de la inversión extranjera.

La depresión económica iniciada en 1998, que culminó en la gran crisis del cambio de siglo, dañó el consenso creado en torno a las bondades de las políticas de liberalización de los mercados, y le hizo pagar un precio muy alto a sus principales inspiradores. Sin embargo, el rechazo que despertó el programa neoliberal no sentó las bases para un reverdecimiento perdurable del prestigio de la industria protegida y orientada hacia el mercado interno como único gran motor de desarrollo. Pues si en la última década y media se alzaron muchas voces señalando la necesidad de encontrar fórmulas económicas capaces de revertir el retroceso que el sector manufacturero venía experimentando desde la década de 1970, casi todas ellas alertaron sobre la necesidad de conciliar el crecimiento de la actividad manufacturera dirigida a atender la demanda interna con el estímulo a los sectores que en el curso del último cuarto de siglo han acentuado el perfil exportador de nuestra economía, dentro de los cuales (para ponerlo en palabras del ya citado Aldo Ferrer) "el campo

⁷⁰ Pablo GERCHUNOFF y Pablo FAJGELBAUM: *¿Por qué la Argentina no fue Australia? Una hipótesis sobre un cambio de rumbo*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, pp. 22, 96.

⁷¹ Pablo GERCHUNOFF y Juan Carlos TORRE: "La política de liberalización económica en la administración de Menem", *Desarrollo Económico* 36:143 (1996), pp. 733-68.

es un sector fundamental”⁷². Al mismo tiempo, la recuperación experimentada por la industria en la etapa abierta en 2002 ha dado lugar a evaluaciones relativamente cautas sobre el potencial de crecimiento de este sector. Así, por ejemplo, un trabajo de la CEPAL dado a conocer algunos meses antes de la crisis del campo concluía que, pese a la reactivación experimentada por la industria merced a la mayor protección frente a la competencia internacional y la baja de los costos laborales “no hay cambios significativos en los coeficientes de empleo ni en los requerimientos de insumos y componentes importados, no ha avanzado un proceso de sustitución de intermedios y finales, no aparecen nuevos sesgos intersectoriales, no han habido modificaciones importantes en la composición de la producción local y no se ha alterado la (débil) conducta innovadora de las firmas”⁷³. La limitada capacidad de este sector para generar empleo, y en particular empleo calificado, sin duda contribuyó a este pesimismo⁷⁴.

En este escenario, la tradicional oposición entre un campo tecnológicamente atrasado a la vez que socialmente injusto, y una industria que constituye el único sector capaz de promover el desarrollo, integrar regiones periféricas y dar respuestas a las demandas de bienestar de las clases populares, ha perdido la relevancia que poseía en el debate público de las décadas de apogeo de la sustitución de importaciones. Desde hace algún tiempo, incluso, muchos de los que desconfían de la capacidad del sector agropecuario para resolver los problemas de empleo e inequidad que afectan a nuestra sociedad, y que insisten en la importancia de la actividad industrial para la construcción de una economía más integrada, parecen dispuestos a reconocer tanto que el agro constituye un sector particularmente dinámico como que el empresariado rural de nuestro tiempo no puede ser concebido como el arcaico actor económico retratado por la literatura especializada y el sentido común de algunas décadas atrás. E incluso antiguos promotores del industrialismo como la CEPAL hacen suyo el argumento de que el sector agropecuario “aparece actualmente como el más dinámico del país”⁷⁵.

La relación entre el público urbano que desempeñó un papel de considerable importancia en la crisis del campo y el sector rural debe ser situado en este marco, signado por la erosión del consenso generado en torno al proyecto que concibe a la industria protegida y volcada hacia el mercado interno como el primer motor del desarrollo económico y social del país. Aún no contamos con estudios específicos que nos permitan entender cómo el ocaso del sueño de la Argentina industrial ha abierto el camino para una reevaluación del potencial atribuido al sector rural. Sin embargo, un indicio de la hondura de este cambio puede alcanzarse al contrastar el eco alcanzado por las movilizaciones agrarias de mediados de la década de 1980

⁷² Véase: www.unr.edu.ar/digiblog_notas/1622/aldo_ferrer.

⁷³ Guillermo ANLLÓ, Bernardo KOSACOFF y Adrián RAMOS: “Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007”, en B. KOSACOFF (editor): *Crisis, recuperación y nuevos dilemas*, p. 18.

⁷⁴ En vísperas de la crisis del campo, la participación de la industria en el empleo total (25 %) se encontraba bastante por debajo del valor alcanzado en 1997 (31 %). Véase Cecilia FERNÁNDEZ BUGNA y Fernando PORTA: “El crecimiento reciente de la industria argentina. Nuevo régimen sin cambio estructural”, en B. KOSACOFF (editor): *Crisis, recuperación y nuevos dilemas*, p. 84.

⁷⁵ ANLLÓ, KOSACOFF y RAMOS: “Crisis, recuperación y nuevos dilemas”, en B. KOSACOFF (editor): *Crisis, recuperación y nuevos dilemas*, p. 19.

con las ya analizadas de 2008⁷⁶. Hoy borrado de la memoria colectiva, ese ciclo de protesta agraria tuvo quizás punto más alto en el “camionetazo” que los afiliados a CARBAP, con el acompañamiento de la SRA, protagonizaron a mediados de marzo de 1985. En un momento en el que los precios internacionales de las exportaciones agrarias se hallaban muy deprimidos, y las retenciones superaban el 40 %, los ruralistas salieron a la calle a expresar su descontento⁷⁷. Columnas de vehículos provenientes de distintos puntos de la región pampeana confluyeron en los alrededores de la ciudad, para desde allí avanzar sobre la Plaza de Mayo. Las duras críticas con que fue recibida esta protesta agraria, alzadas en un contexto sin duda más difícil para los productores que el de 2008, pone de relieve la muy escasa legitimidad de que entonces gozaban sus demandas. A la hostilidad pública también se sumó la firmeza del gobierno democrático. Antes de que los manifestantes agrarios pudieran hacer su ingreso a la Capital Federal, sus columnas de vehículos fueron detenidas por la policía, y obligadas a dispersarse.

Sobre los protagonistas del camionetazo de marzo de 1985 cayeron duras acusaciones. Se los calificó de nostálgicos de los tiempos de la dictadura militar que había caído un par de años antes, en medio de un descrédito generalizado. Sin embargo, el principal argumento en su contra no era político sino económico. Ampliamente percibidos como incapaces de identificar sus demandas con el interés general, la imagen de los empresarios rurales como el sector más arcaico de la comunidad de negocios, y del campo como el reino del atraso y la inequidad, mantenía en esos años parte muy considerable de su vigencia tradicional. La pobre reputación que poseía el sector rural tanto entre la dirigencia política como entre sectores más amplios de la opinión se observa al comprobar que las plataformas electorales de la UCR y el PJ (las dos fuerzas que cosecharon cuatro quintas partes de los sufragios en las elecciones de esos años) hacían mención explícita a la necesidad de implantar un impuesto a la tierra libre de mejoras, una medida destinada a castigar a un empresariado tenido por refractario al cambio tecnológico. No tan distinta era la opinión del periódico de mayor circulación del país, que se mantenía aferrado al credo industrialista. Al evaluar el significado de las protestas rurales, *Clarín* señaló que “el progreso agropecuario en el mundo moderno sólo es posible en tanto existe una

⁷⁶ Esta mutación no se reduce al universo de la producción, pues involucra transformaciones sociales y culturales más amplias. Aun cuando el análisis de esta dimensión escapa a los objetivos de este artículo, es importante señalar que, además de su renovado prestigio como productor de riqueza, el auge de lo rural influye en la esfera de las ideas, los patrones de consumo y los estilos de vida. Este cambio puede advertirse de múltiples maneras: en la revaloración (y a veces añoranza) de las glorias de la Argentina agroexportadora de la era previa a la Crisis del Treinta, en el creciente atractivo de las propuestas residenciales suburbanas identificadas con el campo y el verde (countries, chacras y clubs de campo), en el crecimiento del turismo de estancias, en el desarrollo de estilos decorativos “estilo campo” y de indumentaria que evocan el mundo campestre. El sector de la opinión que es objeto de esta interpelación es lo suficientemente numeroso como para alentar emprendimientos comerciales como la publicación *El Federal* (aparecido en 2004), que se presenta como “la primera revista de interés general con aire de campo”; el Canal Rural, una señal de cable cuya programación está dominada por la temática rural y la perspectiva ruralista; la publicación de suplementos “countries” y “campo” en los mayores periódicos del país, y el crecimiento de la oferta de indumentaria “estilo campo” por parte de exitosas empresas como Cardón.

⁷⁷ BARSKY y DÁVILA: *La rebelión del campo*, pp. 156-8. De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, en esos años el 45 % del PBI agrario era transferido vía impuestos al sector público o a otros sectores de la economía. Manzetti, “The Evolution”, p. 613.

sólida base industrial que ponga a disposición del campo los bienes de capital, los insumos y la tecnología adecuados para un crecimiento constante de la actividad”⁷⁸. De acuerdo con esta visión, pues, el incremento de la producción agraria era una suerte de derivado del desarrollo industrial. Y el propio presidente Raúl Alfonsín, que por momentos intentó desempeñar un papel conciliador en la disputa con los ruralistas, señaló que “desde que asumió el Gobierno, estamos procurando convencer a la sociedad de que la actividad agropecuaria no tiene nada que ver con lo vetusto y lo obsoleto, ya que cada vez es más como una industria”⁷⁹.

Cuando estalló el conflicto del campo, lo que en 1985 era una casi unánime condena sólo permanecía como patrimonio de un segmento poderoso pero circunscripto de la opinión. El eco alcanzado por la movilización agraria de 2008 sugiere hasta qué punto ha cambiado el humor colectivo en esta materia. La misión educadora que por un instante Alfonsín se propuso llevar adelante (y que no lo salvó de una dura silbatina en la inauguración de la Exposición de Palermo de 1988) encontró, en los últimos años, propagandistas más convencidos y competentes, y también más exitosos, que nuestro primer presidente de la democracia, así como un humor social más propicio para desplegarse. Las utopías futuristas tan caras a los ideólogos del nuevo ruralismo, que ven en el campo al “primer sector en entrar en la sociedad del conocimiento”, difícilmente gocen de plena aceptación fuera del círculo que las promueve⁸⁰. Pero la renovada presencia del universo rural en la vida argentina, y la crecida legitimidad de los que hablan en su nombre, ofrece un testimonio elocuente acerca de una importante transformación en la valoración social de que el campo fue objeto en las últimas dos décadas, así como también de las expectativas positivas que este sector de actividad ha logrado suscitar. Y ello está en la base del reclamo agrario de nuestro tiempo.

III. El conflicto en perspectiva

En el curso de las últimas dos décadas, la Argentina ha revalorizado el potencial que anida en su economía agraria. Este fenómeno reconoce causas que exceden el marco nacional, y que se relacionan con la simpatía que despiertan, en los países del Atlántico Norte, los modelos de desarrollo amigables hacia el medio ambiente. En nuestro país, sin embargo, el ascenso del verde se vincula menos con las consecuencias negativas del avance de la civilización industrial que con sus promesas incumplidas. En particular, el renacido atractivo del campo se despliega en un contexto marcado por la declinación de la capacidad del programa de industrialización adoptado en las décadas centrales del siglo XX para estimular el crecimiento y promover el bienestar. En los últimos años, un nuevo ciclo de expansión del mercado mundial para productos primarios le ha otorgado al sector agroexportador, por primera vez en más de setenta años, perspectivas de crecimiento muy promisorias en el mediano y largo plazo. Todo ello vuelve a poner de relieve que, gracias a la excepcional dotación de recursos naturales para la producción agrícola con que cuenta nuestro

⁷⁸ *Clarín*, 15/3/1985, p. 14.

⁷⁹ *Clarín*, 14/3/1985.

⁸⁰ Citado en HERNÁNDEZ: “El fenómeno del empresariado innovador”, p. 359.

país, el sector rural constituye el sector más competitivo de nuestra economía. Renovado en sus estructuras productivas, y dotado de bases sociales y geográficas más poderosas y más amplias, lo que incluso técnicos del gobierno kirchnerista han calificado como “el campo más competitivo del mundo” proyecta una imagen de dinamismo y modernidad tecnológica de la que por largas décadas careció. De su seno ha surgido una nueva elite empresaria, distinta de los tradicionales voceros del sector, que se siente capaz de invocar el lenguaje de la novedad y el progreso, la generación de valor y (cada vez con mayor osadía) la distribución de la riqueza. Como resultado de estas transformaciones, hoy el sector rural es percibido por importantes segmentos de la opinión pública como una pieza central en todo proyecto de desarrollo, y para algunos como un creador de riqueza aún más importante que el sector manufacturero.

Sobre esas bases, el campo se ha erigido en un actor público de relevancia, que percibe su acrecida importancia económica y social como el producto, más que del apoyo del Estado, de sus propios recursos y talentos. En rigor, la expansión agraria del nuevo siglo reactualizó antiguos recelos ruralistas ante el orden político y la presión fiscal del Estado. En este sentido, el incremento impositivo de marzo de 2008 terminó provocando una respuesta masiva y contundente porque esta punción puntual – percibida por muchos productores como parte de una larga serie de exacciones sin mayores contraprestaciones– operó sobre actores que en el curso de las últimas dos décadas han venido ganando poder económico pero también confianza en sus propias fuerzas, y que han reafirmado su creencia en la legitimidad de sus reclamos.

Sobre la base de este cambio cultural, y venciendo su tradicional dificultad para movilizarse, en el conflicto del año 2008 el ruralismo ha producido hechos políticos de significación. Alcanzó un primer triunfo cuando el movimiento de los autoconvocados logró arraigar la protesta en el ámbito local. Los cambios en el repertorio de la movilización popular, que consagraron al piquete como una forma de protesta legítima, le permitieron superar lo que durante mucho tiempo fue una de sus principales debilidades organizativas: la que deriva de la localización desconcentrada de sus bases de apoyo. La acción de los medios de comunicación resultó crucial para alcanzar este resultado. Percibidos por sus protagonistas como una opción tan efectiva como legítima para dar forma al reclamo agrario, los cortes de ruta se expandieron por toda la geografía de la soja. La transformación en los patrones residenciales de la población rural en las últimas décadas, que atenuaron el aislamiento de los productores y los proveedores de servicios, y la difusión de dispositivos de comunicación inalámbricos, que contribuyó a difundir y coordinar la protesta, ayudaron a suministrar la masa militante y los recursos organizativos necesarios para sostener a lo largo de semanas y de meses el reclamo en las rutas. El hecho de que cerca de dos tercios de las actividades vinculadas con la producción agrícola sean llevadas adelante por figuras ajenas a los propietarios del suelo (proveedores de servicios, contratistas, transportistas, etc.) contribuye a explicar el eco que la protesta agraria encontró en pueblos y ciudades de los distritos agrícolas. De este modo, el hábitat disperso, que durante muchas décadas constituyó un obstáculo para la movilización de los productores agropecuarios, dejó de operar como un impedimento para la organización y la visibilidad del reclamo agrario, sobre todo desde que los medios de comunicación le dieron resonancia nacional a las protestas locales.

El éxito de las grandes concentraciones ruralistas en las ciudades de Rosario y Buenos Aires requirió de la colaboración de factores adicionales. El eco alcanzado por estas convocatorias dependió de modo crucial de las tensiones políticas que el propio conflicto contribuyó a originar. Ellas sirvieron para ampliar el arco de solidaridades articuladas en torno al ruralismo en la región sojera, así como para politizar y movilizar los sentimientos favorables al sector rural que han ganado espacio entre la población urbana en los últimos años. A su vez, los partidos políticos opositores al gobierno nacional sumaron su capacidad de movilización. Todo sugiere, sin embargo, que los actos de Rosario y Palermo se beneficiaron pero no dependieron de este último aporte. Los dirigentes y activistas agrarios lograron movilizar audiencias más amplias que las del propio sector o las clientelas de los partidos de la oposición por cuanto el conflicto terminó por colocarlos, a los ojos de muchos de los que se sumaron a la protesta del campo, en la posición de víctimas de una disputa que no sólo ponía de relieve la intransigencia del gobierno, sino que también afectaba a un sector de la producción dotado, tanto o más que cualquier otro, de una considerable capacidad para producir crecimiento y bienestar.

El conflicto del campo significó el primer traspíe de la administración Kirchner. Las derivaciones políticas de este suceso todavía resultan difíciles de determinar. En lo que se refiere al futuro del ruralismo, nada indica que las antiguas debilidades organizativas señaladas en este trabajo hayan desaparecido por completo. De hecho, el desarrollo de la movilización que acompañó a la rebelión agraria difícilmente pueda imaginarse con independencia de las peculiares circunstancias creadas por la libertad concedida a la protesta en las rutas y la estrategia confrontativa adoptada por el gobierno nacional. En ausencia de estos factores aglutinantes y revulsivos, la capacidad del ruralismo de movilizar a sus bases y despertar simpatías en sectores más amplios de la población hubiese resultado más acotada. Del mismo modo, la cohesión del frente propietario agrario, que las transformaciones experimentadas por la agricultura de exportación en las últimas décadas hicieron posible, debió su solidez, más que a la capacidad de los dirigentes del sector para definir una agenda común, al proceso de polarización política nacido en el curso del propio conflicto. Como todo conflicto de magnitud, la crisis del campo produjo sus propios actores. A la luz de esta experiencia, podría concluirse que el lugar del ruralismo en el escenario político sigue siendo el de un actor con más capacidad de resistencia y reacción que de organización e iniciativa. En otro aspecto, sin embargo, la crisis del campo ha dejado un escenario radicalmente modificado. Los sucesos del otoño de 2008 le han dado visibilidad a las transformaciones que la agricultura de exportación y sus anexos industriales han venido experimentando en el curso del último cuarto de siglo, y han contribuido a incrementar el peso no sólo económico sino también social y cultural del sector rural. El modo en que este proceso impactará sobre el futuro político del país permanece, por el momento, como un interrogante sin respuesta.

RESUMEN

Este artículo analiza la crisis del campo de marzo-junio de 2008, la mayor movilización agraria de la historia argentina. En primer lugar, el ensayo describe el desarrollo del conflicto entre el gobierno nacional y los productores agrarios provocado por la decisión de incrementar la carga impositiva sobre las exportaciones de soja y otros granos. Estudia la forma que adoptó la movilización agraria, explora de qué modo los cambios en el repertorio de la protesta social desarrollados desde la década de 1990 crearon condiciones propicias para la acción de un sector

tradicionalmente marcado por grandes dificultades organizativas, y analiza la respuesta del gobierno ante el desafío ruralista. La segunda parte del trabajo se concentra en los dos aspectos no sólo más novedosos sino también más relevantes de la protesta del campo: la capacidad de los grupos movilizados para trascender las diferencias de perspectivas e intereses que dividieron a los empresarios agrarios y a sus instituciones representativas durante décadas, y el considerable eco alcanzado por el reclamo ruralista, en particular entre la población urbana.

SUMMARY

This article analyses the campo crisis of March-June 2008 Argentina's longest ever farm strike. The first section describes the farmers' rebellion that started when the government announced a new sliding-scale system of export taxes that increased levies on soy beans and other exportable agricultural products. It shows that changes in the repertoire of contention in the previous decade, particularly highway blockades, helped rural producers –a

group that always found it difficult to mobilize in the public sphere– to challenge the government. The second part of the essay looks into the two most important, and largely new, developments brought about by the campo crisis: the rural producers' ability to coalesce in a solid block, in which the four major business organizations and most farmers came together, and their ability to rally wide-ranging support from urban society.

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO

HORA, Roy

"La crisis del campo del otoño de 2008". *DESARROLLO ECONÓMICO – REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES* (Buenos Aires), vol. 50, Nº 197, abril-junio 2010 (pp. 81-111).

Descriptores: <Movimientos sociales> <Protesta agraria> <Economía agraria> <Argentina> .